



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# **Convenio 141 de la OIT: Desarrollo del Derecho de Asociación y Libertad Sindical, ¿Ratificación redundante o necesaria para los trabajadores rurales colombianos?**

**Diego Germán García Gutiérrez**

**Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  
Bogotá, D.C., Colombia  
2014**



# **Convenio 141 de la OIT: Desarrollo del Derecho de Asociación y Libertad Sindical, ¿Ratificación redundante o necesaria para los trabajadores rurales colombianos?**

**Diego Germán García Gutiérrez**  
**Código: 699774**

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de:  
Magíster en Derecho**

**Director:**  
**Doctor Jairo Hernando Estrada Álvarez**

**Universidad Nacional de Colombia**  
**Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales**  
**Bogotá, D.C., Colombia**  
**2014**



*A mis padres, Germán y Silvia.*

*A Claudia, mi esposa.*



## **Agradecimientos**

Expreso mi gratitud a mi Director de Trabajo de Grado, el profesor Jairo Estrada, pues sin sus valiosas y precisas orientaciones y correcciones, este documento no habría visto la luz. También debo agradecer a mi hermana Francy, por el ánimo que me brindó en la elaboración de este trabajo, muchos de sus consejos y apreciaciones se ven plasmados en el mismo.

*“Si la estructura de poder es firme y cerrada (los campesinos)  
se retraen en su postura usual de esperar. Si empieza a  
abrirse o quebrarse, se preparan para la acción”*

**Eric Hobsbawm**



## Resumen

Este análisis aborda el debate sobre los campesinos –llamados indistintamente trabajadores rurales–, y su trabajo, específicamente en relación con los derechos que tienen a agruparse en organizaciones sindicales o similares, en busca de mejorar sus condiciones de vida, y sobre la obligación, particularmente del gobierno colombiano, de apoyar el ejercicio de tales garantías. De esta manera, el estudio gira en torno al convenio 141 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como valioso instrumento jurídico para el efectivo desarrollo de esos derechos de los campesinos en nuestro país.

**Palabras Clave:** Campesinos, trabajadores rurales, sindicatos agrarios, derecho de asociación, libertad sindical, convenio No. 141 y recomendación No. 149 de la OIT.

## Abstract

This analysis addresses the debate between farmers- indistinctly called agricultural workers-, and their labour, especially regarding their right to join syndicates or associations, as means for improving their living conditions; also, the obligation, particularly of the Colombian Government, to support the exercise of those guarantees. Thus, this study deals with the Act No 141 (Employment Security Act) of the ILO (International Labour Organization), as a valuable legal instrument to assure the exercise of the rights farmers have in our country.

**Key Words:** Farmers, agricultural workers, farmer's union, right of association, freedom of association, Conventions No 141 and rural workers' organization recommendation No 149 of the ILO.

# Contenido

	Pág.
<b>Resumen y Abstract.....</b>	<b>IX</b>
<b>Lista de tablas .....</b>	<b>XIII</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Los Trabajadores Rurales en Colombia .....</b>	<b>13</b>
1.1 Hacia una definición de los trabajadores rurales en Colombia .....	13
1.1.1 El “campesino” desde análisis multidisciplinarios .....	13
1.1.2 Los campesinos o trabajadores rurales desde la legislación colombiana y los organismos multilaterales (OIT y ONU) .....	23
1.2 Categorías de campesinos o trabajadores rurales en Colombia .....	31
1.3 Condiciones de los trabajadores rurales en Colombia.....	39
<b>2. El convenio 141 de la OIT, sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales...</b>	<b>45</b>
2.1 Antecedentes del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT .....	45
2.2 Análisis de la normativa del Convenio No. 141 de la OIT y la Recomendación No. 149 .....	59
2.2.1 Las organizaciones que comprende el Convenio 141 de la OIT .....	60
2.2.2 Ámbito de aplicación personal .....	61
2.2.3 Ámbito de aplicación material .....	63
2.3 Aplicación del Convenio 141 de la OIT en algunos países de América Latina .....	68
<b>3. El Derecho de Asociación y la Libertad Sindical en los Trabajadores Rurales Colombianos .....</b>	<b>73</b>
3.1 El Estado Colombiano frente al Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT 73	
3.2 El ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia .....	76
<b>4. Conclusiones y recomendaciones.....</b>	<b>85</b>
<b>A. Anexo: Convenio sobre las organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975 (núm. 141).....</b>	<b>91</b>

<b>B.Anexo: Recomendación sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales 1975 (núm. 141).....</b>	<b>97</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>109</b>

## Lista de tablas

	Pág.
<b>Tabla 1.</b> Resumen tendencias conceptuales de la antigua tradición de estudios campesinos	15
<b>Tabla 2.</b> Resumen tendencias conceptuales de la nueva tradición de estudios campesinos	16
<b>Tabla 3.</b> Categorías de campesinos o trabajadores rurales según Sevilla Guzmán	32
<b>Tabla 4.</b> Categorías campesinos o trabajadores rurales en Colombia propuestos en este análisis	33
<b>Tabla 5.</b> Estructura de la propiedad según rangos de las unidades agrarias familiares (UAF)	40
<b>Tabla 6.</b> Uso del suelo en Colombia	41
<b>Tabla 7.</b> Niveles de pobreza y pobreza extrema en Colombia para 2010	42



# Introducción

El propósito de este trabajo es analizar la garantía del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia. Para ello se examina tanto la situación de éstos sujetos en nuestro país, como las normativas existentes que aseguran tales derechos. Si bien el estado Colombiano ha ratificado los Convenios 87 y 98 de la OIT, dentro de los cuales ésta clase de trabajadores están incluidos, el Convenio 141 y la Recomendación 149 le dan un alcance específico a tales derechos; alcance que va más allá de las garantías establecidas en los dos primeros instrumentos, a través de la inclusión de la promoción y el patrocinio del sindicalismo agrario en sus múltiples aspectos.

Por tanto, si bien existe un respeto al derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales, a los cuales se les garantiza formalmente el derecho de asociación bajo la normatividad interna y los Convenios fundamentales 87 y 98, que el estado Colombiano ha ratificado, toda vez que efectivamente existe la posibilidad de crear e inscribir sindicatos de trabajadores rurales de primer y segundo grado, el presente trabajo busca responder a la pregunta formulada a partir del título del presente documento, esto es, si la ratificación del Convenio 141 es redundante, dadas las garantías de que ya gozan, o se hace necesaria su ratificación para el efectivo ejercicio de las mismas, dadas sus particulares condiciones.

Frente a lo anterior, la hipótesis que buscaremos comprobar en el presente trabajo consiste en que, más que necesaria se hace urgente la ratificación del Convenio 141 de la OIT para asegurar el derecho de asociación y la libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia. Esto, por cuanto tal instrumento confiere una nueva dimensión a tales derechos fundamentales, bajo la cual el Estado Colombiano deberá adoptar una política sistemática y coherente de fomento a los mismos, así como la garantía de la participación activa de tales organizaciones en el desarrollo económico y social regional y nacional, eliminando todos los obstáculos frente a estos dos objetivos. Ello se traduce, no

sólo en asegurar unas condiciones de trabajo, sino en elevar el nivel de vida de los mismos, y habida cuenta de la condiciones de nuestros trabajadores rurales, signadas por la exclusión, violencia, pobreza, la estigmatización, la falta de tierra que asegure su trabajo y existencia, así como la falta de su reconocimiento como sujeto de derecho, el Convenio 141, junto con la Recomendación 149, se convierten en valiosos instrumentos que, a través de la ratificación de unos derechos laborales, empiezan a eliminar tan injustas condiciones.

En ese sentido, este trabajo presenta un análisis que brinda elementos contextuales como jurídicos, para recomendar la ratificación o no, de esa normativa internacional. En primera instancia, se hace una aproximación a la definición de campesinos; se resalta la dificultad de una conceptualización puntual de los mismos y se hace un recorrido teórico desde las principales corrientes que los han tratado. También se aborda la noción de campesinos o trabajadores rurales desde la legislación colombiana y desde organismos multilaterales (OIT y ONU). Luego se presentan las categorías de trabajadores rurales existentes en Colombia y las condiciones de vida de los mismos.

En seguida, se trata el convenio 141 de la OIT, sus antecedentes, las organizaciones que cubre, los ámbitos de aplicación personal y material, y se presentan dos ejemplos de aplicación del convenio en dos países latinoamericanos. Para ello se ha realizado una revisión documental de los archivos de ese organismo internacional y se han revisado publicaciones sobre la región latinoamericana.

Finalmente, se aborda el derecho de asociación de los trabajadores rurales colombianos. A través de la revisión de publicaciones académicas sobre estos sujetos, y también de entrevistas a sindicalistas agrarios, se presenta un diagnóstico en torno a estos trabajadores en Colombia, en el que resaltan los obstáculos y las condiciones problemáticas en que viven los campesinos y sus organizaciones laborales. Teniendo en cuenta este panorama, se revisan y exponen las limitadas posibilidades jurídicas de la normativa actual en nuestro país sobre el tema, como las opciones y prescripciones que el convenio 141 y la recomendación 149 viabilizarían en pro de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales colombianos, que continúan sustentando a todos los nacionales con sus sistemas agrícolas.



Se zanjó una problemática que fue recurrente para iniciar el presente estudio, que consistió en determinar el sujeto social al cual nos estábamos refiriendo, pues aunque suene paradójico, no existe una delimitación puntual que dé cuenta de qué es trabajador rural, y de si tal categoría es análoga a la categoría de campesino, en consecuencia se partió de caracterizar tales categorías, y la valoración social que han adquirido.

En busca de una definición y delimitación de los sujetos que laboran y viven en el campo, se examinaron los abordajes teóricos tanto clásicos como los más locales. Así, la idea evolucionista de progreso, desarrollada por la economía clásica del siglo XVIII, entiende cualquier aspecto relacionado con el campo como local, atrasado, autárquico, en oposición a lo urbano como sinónimo de modernidad, de lo industrial y de desarrollo (Pérez, 2001). Dentro de tal relación dual, los “campesinos” están vinculados principalmente a actividades agropecuarias en el marco del rezago y la indocilidad.

Aunque esa idea dicotómica y despreciativa, aún es vigente – a pesar de los cambios sociales que tienden a estimar el agro y sus trabajadores–, y basa muchas de las mediciones que el estado colombiano emplea para trazar sus políticas agrarias<sup>1</sup>, al menos en los estudios académicos, esa dualidad parece haberse superado. Pero, ¿quiénes son los pobladores del campo?, y ¿por qué nuestro interés en su trabajo?

Los análisis clásicos unánimemente tratan a los sujetos rurales como campesinos. Alrededor de un siglo ha pasado, desde los debates económicos y políticos que signaban al campesinado como una clase social explotada, agente de la revolución anti capitalista, ya fuese por la confianza en sus lazos solidarios o comunitarios, por la exacerbación del

---

<sup>1</sup> Un ejemplo claro y simple son las mediciones de la cantidad de pobladores rurales. El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), usa las categorías “cabecera”, “centro poblado” y “rural disperso” para cuantificar a pobladores rurales y urbanos. Las dos últimas (centro poblado y rural disperso) conforman la categoría “resto”, que ha sido tradicionalmente identificada como lo “rural”, mientras que la “cabecera” se encuentra identificada como “lo urbano”. Este es el origen de la conocida aseveración que el 75% de la población del país es urbana, mientras que el 25% es rural (Informe Nacional de Desarrollo Humano. 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Pág. 53. Bogotá, D.C.: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo –PNUD–). Mientras otros estudios desde la nueva ruralidad o desde la geografía económica, amplían sus mediciones a poblaciones pequeñas cuyas economías y relaciones sociales giren en torno a la agricultura, y/o usando variables como la densidad poblacional, el costo y distancia para el transporte hacia las ciudades medianas y grandes, y el diferencial de ingreso.

choque pauperizante con el modelo acumulativo de capital, mercantilista, etc. Hace medio siglo, esos estudios desembarcaron en los debates entre campesinistas y descampesinistas, que vaticinaban la sobrevivencia o desaparición de los campesinos con la introducción en el modelo económico capitalista global.

La pervivencia de estos últimos dentro de ese modelo, motivó varias tendencias alternativas que tratan a los campesinos. Con Llambí (1990) creemos que tales sujetos se recrean y transforman con sus sociedades e historia, de tal manera que el campesino de la hacienda (con sus categorías: peón, criado, etc.) por ejemplo, cambió con la introducción de su país en el régimen primario exportador de materias primas a inicios del siglo pasado. Así mismo, ese campesino se transformó con la apertura de zonas de colonización (se convirtió en pequeño propietario con o sin legalización de su propiedad, con todo, alejadas y de difícil acceso). Hoy, ese campesino también está cambiando con la apertura económica y diversificación de productos exportables y de mercados mundiales, que han flexibilizado las formas de contratación laboral, el trabajo estacionario y formas de aparcería, eludiendo regulaciones y generando formas precarias de salarización.

Los agroecologistas por su parte, resaltan y respaldan los conocimientos de los campesinos sobre el manejo sustentable o racional de los recursos naturales, especialmente en tiempos contemporáneos de crisis del modelo desarrollista moderno y de crisis climática mundial.

Todas esas tendencias han aportado elementos para apuntar hacia lo que son, o la función que cumplen los campesinos. Subyace una idea común, que resalta a estos últimos como moradores del campo y trabajadores del agro. Aquí está la relación entre el trabajo y los sujetos que se tomó como un elemento clave en este análisis, en tanto ellos se definen por su labor específica de agricultura, independientemente si les corresponde un papel histórico revolucionario, fatalista, o social ecologista.

En consecuencia, el trabajo agrícola (y las relaciones que genera) es un factor determinante en el ser y la sociedad campesina, a través del cual se generan procesos de identidad que los lleva a reconocerse y relacionarse tales. Dentro de esas relaciones, se despliega un saber hacer que se materializa principalmente en: laborar la tierra,

generar productos inmediatos de consumo y materias primas, producir su propio sustento, posibilidad y necesidad de enajenar su fuerza de trabajo y la de su familia (vinculándola a diversas formas de relaciones sociales de trabajo y producción), y la posibilidad y necesidad de desarrollar relaciones familiares de diverso grado y circuitos comunales de mayor o menor extensión y complejidad; todos los cuales necesariamente se realizan a través del vínculo con la tierra<sup>2</sup>.

De acuerdo con Sevilla Guzmán (s.f. a.), el campesinado es aquel segmento social, integrado por unidades familiares de producción y consumo, cuya organización social y económica se basa en la explotación agraria del suelo, indistintamente de que posean o no la tierra, y de la forma de tenencia que las vincule a ella, y cuya característica de relaciones sociales se desarrolla en comunidades rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia, y en muchos casos de explotación, con el resto de la sociedad, en términos de poder político, cultural y económico<sup>3</sup>.

Ahora, la noción de ‘campesino’ es distinta a la de ‘poblador rural’ que los estudios de la nueva ruralidad han querido promocionar incluyendo a otros sujetos que, aunque puedan residir en el campo, no son campesinos, desdibujando de paso a estos últimos como principales protagonistas del espacio rural y del trabajo agrícola.

Precisamente, el trabajo agrario como forma de vida, sustento y de relaciones sociales, económicas, culturales y con la naturaleza, que caracteriza a los campesinos, es tomado por la OIT para nombrar a estos últimos como “trabajadores rurales”. Aunque pareciera que tal categoría es muy general (ese organismo la denomina de tal manera que incluya las diversas categorías de campesinos que existen en todos los países miembros), sí tiene una definición específica que equivale a los sujetos que aquí denominamos campesinos. La OIT reconoce que,

---

<sup>2</sup> Salgado, Carlos; Prada, Esmeralda. (2000). Campesinado y protesta social en Colombia 1980 – 1995. Bogotá: CINEP. Pág. 55.

<sup>3</sup> Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f. b. Para una definición sociológica de campesinado. Págs. 28 – 29. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de: <http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/18%20Para%20una%20definici%C3%B3n%20sociol%C3%B3gica%20de%20campesinado.pdf>

*la expresión «trabajadores rurales» abarca a todas las categorías de trabajadores dedicados a tareas agrícolas y ocupaciones similares, tanto si son asalariados como si trabajan por cuenta propia (incluidos los aparceros, los arrendatarios y los pequeños propietarios cultivadores), siempre que, en el caso de quienes trabajan por cuenta propia, ellos y su familia realicen la mayor parte del trabajo agrícola, aunque contraten a trabajadores eventuales para ciertas operaciones o el trabajador por cuenta propia trabaje como asalariado durante parte del año<sup>4</sup>.*

De esta manera, se precisa la noción de campesinos y/o trabajadores rurales, y se desligan los terratenientes (su labor es administrativa), y los obreros de la agroindustria (que vincula salarialmente grandes cantidades de personas de manera permanente).

Dentro de las categorías de campesinos o trabajadores rurales, en el presente análisis se proponen algunas, de acuerdo con la forma de tenencia o acceso a la tierra como de la dependencia o independencia de su trabajo. Es clave tener en cuenta que faltaría una serie de estudios de campo en todo el país, para formular un paisaje completo de tal clasificación. De esta manera, las categorías planteadas aquí, son una muestra de la complejidad y de la diversidad de estas construcciones sociales, económicas e históricas.

En el campo colombiano encontramos pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, ‘amedieros’ aportantes de fundos, con acceso directo o indirecto a la tierra y autónomos en su labor. Dentro de los campesinos sin tierra, exploramos las categorías de ‘amedieros’ aportantes de semillas, y trabajadores por surcos (“a la quinta”, “a la séptima”, “a la novena”, etc.), como trabajadores independientes. Y entre los trabajadores rurales dependientes o asalariados, sin acceso a tierra, se encontraron los jornaleros. Esta clasificación, que puede ser mucho más compleja en la realidad del diverso campo de nuestro país, es producto de las condiciones sociales, económicas y políticas que históricamente han enmarcado la labor agrícola de nuestros campesinos.

---

<sup>4</sup> Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, informe VI (1). 1973. Organización de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 7.

A la tradicional desvaloración de la vida campesina (aludida al inicio), y siguiendo a Machado (2009), uno de los elementos transversales de la exclusión del sector rural, obedece a la estructura de la tenencia de la tierra y el uso del suelo en Colombia. Esa estructura se refleja en el 52,2% de la tierra productiva concentrado en sólo el 1,15% de la totalidad de los propietarios rurales. Y al contrario, sólo un 29,69% de esa tierra productiva en manos del 93% de la población campesina (pequeños propietarios y minifundistas)<sup>5</sup>.

Machado (2009) ha calificado a esta, como una estructura agraria bimodal, es decir, una distribución que privilegia el aumento exponencial tanto de la grande como de la, cada vez más pequeña, propiedad rural, y el estrangulamiento de la mediana propiedad, con los consecuentes conflictos por tierra, poca eficacia que entorpece el crecimiento económico, destruye los recursos económicos y desvaloriza lo rural<sup>6</sup>. De esta manera, el control sobre la tenencia de la tierra<sup>7</sup> como recurso, se expresa en poderes políticos, violencia, desconocimiento de derechos, además se usa como un bien especulativo, y como fuente de riqueza, poder y prestigio<sup>8</sup>.

Esa concentración de la tierra productiva en pocas manos (especialmente para ganadería y recientemente para la agroindustria y la minería industrial), ha representado el origen histórico del conflicto interno que aqueja a nuestro país desde hace más de medio siglo. Si hace sesenta años los gamonales asesinaban a campesinos que querían una parcela de su hacienda o que reclamaban una paga justa, hoy grandes poderosos, masacran o desplazan a comunidades enteras para extender la industria palmicultora o minera. En esa dinámica, los campesinos han sido víctimas (cf. Salgado y Prada, 2000), pero también han participado de la misma como actores activos, especialmente en zonas de asiduo conflicto.

---

<sup>5</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD –. 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano. Bogotá. Pág. 181

<sup>6</sup> Machado C., Absalón. 2009. La reforma rural, una deuda social y política. CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

<sup>7</sup> Entendida tenencia de facto o mediante relaciones jurídicas de propiedad.

<sup>8</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD –. 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano. Bogotá. Pág. 181

Moncayo (2008) señala que la ocupación del territorio nacional, a partir de la violencia, el despojo, e incluso las políticas públicas frente al sector, buscan consolidar una economía nacional basada en cultivos de carácter permanente, exitosos en términos de exportación, por lo cual los poderes económicos y políticos siempre se han buscado tener un campo sin campesinos.

Otras formas de exclusión que soportan los trabajadores rurales o campesinos colombianos, están relacionados con la precaria o nula presencia estatal, en varias esferas. En los procesos productivos: falta de transferencia tecnológica para elevar los niveles de productividad, falta de infraestructura vial y pos productiva, carencia de políticas articuladas con los procesos y cadenas productivas del campesinado por regiones, desprotección frente a mercados especulativos de tierras, de empresas transnacionales de agroquímicos, de políticas importadoras de alimentos, privilegio de un modelo de desarrollo urbano-industrial que relega a los campesinos el papel de la producción de materias primas y mano de obra barata, etc. En cuestiones de bienestar social y económico, el retraso de acceso a derechos es preocupante: niveles elevados de pobreza y endeudamiento financiero, analfabetismo, falta de acceso a servicios públicos, crecimiento constante del desempleo (sin acceso a tierras productivas), bajos o nulos niveles de participación política en la toma de decisiones del sector, violencia política, entre otros (Machado, 2009; PNUD, 2011).

Estas problemáticas, han conducido a la población rural a procesos marginación, migración, pobreza estructural, incorporación a la producción de cultivos ilícitos e incluso a grupos armados, como respuestas a su situación. Todo ello desemboca en el desconocimiento de los campesinos como sujetos políticos, que no ha tenido en cuenta ni mucho menos ha respetado sus intereses y modos de vida. Es decir, no se los ha reconocido como sujetos particulares, que den peso a sus derechos, especificidades y a su constitución de ciudadanía. Desconocimiento que a su vez, niega la redistribución de activos a favor de los sujetos no valorados, que permita a la sociedad a integrarlo en sus procesos de desarrollo (Forero, 2010).

Esta deuda, no sólo recae en cabeza del Estado sino también en la sociedad misma, pues ambos actores han inhibido al campesinado al no reconocerlo como productor, como ciudadano facultado para acceder a salud, vivienda, educación, crédito, en fin, a

las condiciones y derechos que posibilitan una vida digna, al impedir su acceso a su mayor activo, la tierra, permitiendo la perpetuación del latifundio “improductivo”, y además porque entidades que deberían brindar un soporte financiero, tecnológico y comercial a su producción, son insuficientes y en no pocos casos los discriminan (Forero, 2010).

Ahora, una de las herramientas de las que han echado mano los campesinos para hacer frente a las múltiples problemáticas que viven, y continuar con sus sistemas de relaciones y de producción, tal vez siguiendo el carácter colectivista o de comunidad rural, se relaciona con su organización en asociaciones.

En Colombia, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), reúne a sindicatos y asociaciones de trabajadores rurales colombianos. Según su presidente Eberto Díaz (2014), el Ministerio del Trabajo ha reconocido personería jurídica a sindicatos de trabajadores rurales de diferente categoría, como sindicatos de pequeños productores dueños de tierra<sup>9</sup>, a sindicatos de arrendatarios, aparceros y trabajadores jornaleros sin tierra<sup>10</sup>, a sindicatos de pequeños productores y comercializadores<sup>11</sup>, y a sindicatos departamentales que recogen a todas las categorías de trabajadores rurales<sup>12</sup>.

Además, el gobierno colombiano considera que respeta los principios de libertad sindical, los cuales están consagrados en la Constitución Política, como en el Código Sustantivo del Trabajo, elementos con los cuales se facilita el establecimiento de estas organizaciones de forma voluntaria e independiente<sup>13</sup>. Así lo manifestó su representante ante la Oficina Internacional del Trabajo, poniendo de presente que sometió al congreso

---

<sup>9</sup> Tales como los pequeños productores de panela del Departamento de Caldas, asociados en la Asociación Nacional de Paneleros que se llama “AIPAN”; los pequeños productores de tabaco del Departamento de Santander, asociados en la Asociación de Pequeños Tabacaleros de Colombia “ASOTACOL”, entre otras. Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, enero – abril 2014.

<sup>10</sup> Como el caso de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Recolectores de Café “APEMICAFFÉ”. Ibídem.

<sup>11</sup> Como lo es el caso del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz “SINTRAPAZ”. Ibídem.

<sup>12</sup> Como el caso de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima “ASTRATACOL”. Ibídem.

<sup>13</sup> Ibíd. Págs. 17 y 31.

los convenios relativos al derecho de asociación y libertad sindical<sup>14</sup> dentro de los cuales se encuentran comprendidos los trabajadores rurales. Con ello, y con la promesa de ayudar a superar las problemáticas para constituir y sostener las asociaciones sindicales rurales, empleando la asesoría de sindicatos urbanos, y con formación profesional a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el gobierno colombiano consideró que ya tenía suficiente legislación en la materia, y creyó innecesario ratificar el Convenio 141 sobre el derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales.

Sin embargo, el hostigamiento y la prohibición de reuniones por parte de la fuerza pública, como el asesinato de líderes y de miembros del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del departamento de Sucre (SINDAGRICULTORES) en 2007<sup>15</sup>, así como los señalamientos, amenazas y judicialización de líderes y sindicalistas agrarios como insurgentes, alzados en armas o auxiliares de algún actor armado, como sucedió en enero del presente año en el Bordo Cauca, con la detención y subsiguiente judicialización de 17 campesinos pertenecientes a un sindicato agrario, acusados presuntamente de rebelión<sup>16</sup>, han representado violaciones a la libertad sindical y al derecho de asociación, frente a las que realmente no se ha hecho nada.

De otro lado, la dispersión de las comunidades en extensos territorios, el incesante clima de violencia política y territorial, y todas las problemáticas condiciones que vive nuestro campesinado, han propendido por la casi inexistencia de las organizaciones de campesinos. Según el presidente de FENSUAGRO (2014), las asociaciones y sindicatos existentes, tan sólo cobijan el 1% de la población campesina de Colombia.

Teniendo en cuenta este panorama demostrativo, y que no sólo se trata de vociferar el respeto a la asociación autónoma de los trabajadores rurales, como hasta ahora lo ha hecho el gobierno, sino de brindar los mecanismos, las estrategias y las condiciones para su realización efectiva, ¿los campesinos colombianos contarán con herramientas jurídicas suficientes para garantizar el derecho de libertad de asociación sindical agraria, o será necesaria la ratificación del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT?

---

<sup>14</sup> Convenios 87 y 98 de la OIT, que fueron ratificados mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, respectivamente.

<sup>15</sup> Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, enero – abril 2014.

<sup>16</sup> *Ibidem*.



La importancia de ese convenio y su recomendación, reside en que ésta no sólo pregona el respeto al derecho de asociación y a la libertad sindical de los campesinos, sino que para el desarrollo material de éstos, obliga a brindar apoyo activo a las organizaciones de trabajadores rurales, asegurándoles la participación efectiva en el desarrollo económico y social regional y nacional, y los beneficios que de él se derivan<sup>17</sup>. Frente a esto, la Recomendación 149, propone algunos mecanismos específicos para fomentar la constitución y el crecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales, en la cual se incluyen medidas legislativas y administrativas, de información pública, educación y formación, así como asistencia financiera y material a estas organizaciones indistintamente de su grado.

Por ejemplo, requiere materializar la adopción de medidas adecuadas por parte de los entes pertinentes del Estado para que haya consultas y diálogos efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales, sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales (Párr. 10 Recomendación 149). Es decir, un reconocimiento como sujeto político, que debe ser vinculado a la definición de políticas, tanto del sector rural como del territorio en el cual desarrollan sus planes de vida. En particular, se trataría de la participación en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria<sup>18</sup>.

En Colombia, no existe una política de promoción de los sindicatos tanto ante la población, las autoridades, ni entre los propios trabajadores rurales. Por el contrario, se promueve la estigmatización y se empuja a desarticular las organizaciones de trabajadores agrícolas existentes. Frente a esta situación, la Recomendación 149 (Párr. 14 y 15), propone unos mecanismos para el fomento de estas organizaciones, entre las cuales se encuentra la información de sus derechos por medios masivos de comunicación y de sus condiciones de vida, organizaciones de seminarios con la

---

<sup>17</sup> OIT. 1996. Convenio Núm. 141 y su aplicación en México y Filipinas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123423.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123423.pdf)

<sup>18</sup> Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. La Organización Internacional del Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires. Pág. 352.

participación de todos los sectores rurales y las autoridades públicas, así como programas en las escuelas en las que se reflejen los problemas de la producción agrícola y la vida de los trabajadores rurales.

Si aspiramos a superar las condiciones de pobreza histórica, falta de tierra, estigmatización, violencia, falta de reconocimiento como sujeto de derechos, desplazamiento, analfabetismo, que aquejan a los trabajadores rurales de Colombia, hace falta mucho más que pregonar el respeto por el derecho de asociación y por la libertad sindical de los trabajadores rurales. Hacen falta trazar y ejecutar políticas, compromisos reales, estrategias y mecanismos concretos como los que posibilitan y obligan la ratificación del convenio 141 y la recomendación 149 de la OIT.

# **1. Los Trabajadores Rurales en Colombia**

## **1.1 Hacia una definición de los trabajadores rurales en Colombia**

Para hablar sobre el derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales de Colombia, en primera instancia se hace necesario abordar la definición del tipo de sujeto social al cual nos estamos refiriendo. Desde aquí se observa el primer inconveniente teórico, puesto que por lo menos en Colombia, no existe una conceptualización de trabajador rural, a pesar de que se hable del mismo de forma reiterada en documentos académicos y estatales.

Entonces es necesario realizar un análisis sobre las nociones de trabajadores rurales desde las diferentes aproximaciones que han tratado tal sujeto. Esas ópticas comprenden estudios académicos, el tratamiento desde los organismos Estatales, así como los organismos multilaterales de los cuales Colombia hace parte. En tal sentido, en este aparte, se hace un breve recorrido conceptual que aporta elementos básicos para abordar una noción de trabajador rural en el contexto nacional, que asista a los objetivos de este análisis. En primera instancia se aborda la fértil producción teórica sobre los “campesinos” como sujetos centrales del trabajo rural. Luego se examinan las definiciones sobre los trabajadores rurales desde la normativa nacional e internacional, a fin de puntualizar la diversidad de trabajadores rurales como las reglamentaciones que los consideran y cobijan en Colombia.

### **1.1.1 El “campesino” desde análisis multidisciplinarios**

A partir de recientes perspectivas sobre el agro, que propenden por su industrialización, se ha pretendido invisibilizar a los sujetos campesinos como principales actores de la vivencia y trabajo rural. Sin embargo, los estudios económicos y sociales, históricamente han focalizado su análisis sobre tales sujetos. De igual forma, aquí se toma al

“campesino” como el protagonista del trabajo agrícola, no sólo por la tendencia académica, sino por su real presencia histórica y accionar en nuestro país.

Los análisis elaborados desde el campo teórico que han tratado los sujetos “campesinos” han sido abundantes y fecundos<sup>19</sup>. Diversos autores han abordado esa tarea de manera prolífica con enfoques multidisciplinarios. Éstos incluso se pueden rastrear desde la formación social del capitalismo hasta nuestros días. Sin embargo no existe un consenso, al menos parcial, en relación con los parámetros definitorios del sujeto campesino, toda vez que cada estructuración teórica desarrolla implícita o explícitamente su propio concepto. Recoger la totalidad de tales debates desbordaría el objeto del presente estudio. En cambio, se tomarán principalmente algunas definiciones y análisis surgidos del debate sobre el enfoque con que se ha estudiado el campesinado desde la mitad del pasado siglo; conceptos y debates surgidos en Europa y que se han trasladado al contexto latinoamericano.

Siguiendo a Sevilla Guzmán (2004), han existido dos grandes momentos históricos en los cuales se ha abordado el tema campesino: “*antigua tradición de los estudios campesinos*” y “*nueva tradición de estudios campesinos*”; marcos en los cuales se inscriben diversas perspectivas y enfoques, que sirven de referencia para adoptar una noción sobre trabajadores rurales.

Mientras la “antigua tradición de los estudios campesinos” define a estos sujetos a la deriva de los contextos socio políticos en pro o en rebeldía a los modelos socio económicos comunistas o capitalistas, la “nueva tradición de estudios campesinos” enfatiza la pervivencia de las formas de vida campesinas o de “sociedades campesinas” en medio del modelo económico capitalista expansivo, imprimiendo la percepción de

---

<sup>19</sup> Se puede remitir incluso a los análisis del marxismo realizados por Federico Engels en su “*Carta para Bernstein, agosto 9, de 1982*”, pasando por las definiciones de “*sociedades campesinas*” elaboradas por Alfred L. Kroeber (1948), Robert Redfield (1956) y Eric Wolf (1966); de “*comunidades cerradas*” realizados por Teodor Shanin; de “*mundo propio determinado por las relaciones*” elaborado por Eric Hobsbawm; de “*subordinación y mecanismos de control*” desarrollado por Henry Landsberger; desde diferentes estudios como los de economía campesina desarrollados por Alexander Chayanov (1929), desde la antropología con Vila Rojas (1931), la sociología con Fei (1959) y la historia con Le Roy Ladurie (1972); para referir los más relevantes.

inequidad social entre campesinos y poblaciones urbanas, como también la apreciación de riqueza cultural y ecológica entre los diversos grupos de “campesinos”.

El marco de análisis y acción de la denominada “antigua tradición de los estudios campesinos”, obedeció al conflicto generado por la penetración del capitalismo en la organización social campesina europea y principalmente rusa, problemática abordada teóricamente a partir de tres corrientes, el Narodnismo ruso, el anarquismo agrario y el marxismo ortodoxo agrario.

Tabla 1. Resumen tendencias conceptuales de la antigua tradición de estudios campesinos

<b>Antigua Tradición de estudios campesinos</b>		
<b>Tendencia</b>	<b>Exponentes</b>	<b>Concepción de “campesino” y/o campesinado</b>
Narodnismo Ruso	Alexander I. Herzen y Nikolay Chernyshevsky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupo social que a través de una vía alterna obviaría al capitalismo y saltaría al progreso socialista, fortaleciendo sus formas de acción solidaria y el colectivismo campesino. Ello con el fin de evitar la explotación, descomposición y proletarianización.</li> <li>Instancia moral articuladora de todos esos cambios.</li> </ul>
Anarquismo agrario	Mijail Bakunin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campesino es un agente revolucionario, producto de la conjugación de miseria y servidumbre feudal, con una conciencia histórica de emancipación social. Tiene la convicción de que la tierra pertenece al pueblo que la trabajaba, y su posesión era concebida como un derecho no individual sino comunitario, junto a la autonomía administrativa y política de las comunidades rurales.</li> <li>Llamado a realizar una revolución social.</li> </ul>
	Piotr Kropotkin	<ul style="list-style-type: none"> <li>La ayuda mutua es el motor de las relaciones y la evolución social en el interior de las comunidades rurales, por lo tanto es posible fortalecer al campesinado para convertirlo en una clase revolucionaria.</li> </ul>
Marxismo ortodoxo agrario	V. I. Lenin y Karl Kautsky	<ul style="list-style-type: none"> <li>El campesinado se convertiría en un ente anacrónico bajo el avance de las fuerzas productivas del capitalismo.</li> <li>La agricultura pasaría a convertirse en una rama de la industria y el agricultor en proletario.</li> </ul>

Estos tres enfoques afirmaron a los campesinos como protagonistas de los cambios sociales, como agentes llamados a realizar la revolución social, frente a las condiciones de pauperización y explotación que se avecinaban sobre ellos con la introducción al sistema capitalista. Ese cambio lo realizarían a través de un “salto directo al progreso socialista” que obviara al capitalismo fortaleciendo el accionar solidario o colectivismo comunitarista campesino (Narodnismo de Alexander I. Herzen y Nikolai Chernyshevsky), robusteciendo la ayuda mutua o elemento clave de la evolución y relaciones sociales de las comunidades rurales (Anarquismo agrario de P. Kropotkin), o fortificando la conciencia histórica de emancipación social que afirmaba el derecho a la tierra para el que la trabaja así como otras formas de tenencia y autonomías colectivas campesinas (Anarquismo agrario de Mijail Bakunin).

Otra manera de llegar a la reacción revolucionaria fue propuesta por los análisis dogmáticos del primer tomo de El Capital, que plantearon al campesinado como una clase explotada por el imparable desarrollo de las fuerzas productivas de la estructura social capitalista, que inexorablemente convertiría al campesino en un residuo anacrónico, condenado a desaparecer, transformándolo en proletariado y a la agricultura en una rama más de la industria (marxismo ortodoxo agrario de Gueorgui Plejánov, V. I. Lenin y Karl Kautsky).

La denominada por Sevilla Guzmán (2004) “nueva tradición de estudios campesinos”, surge a partir de estudios antropológicos que sobre “sociedades campesinas” emprendieron Alfred Kroeber y Robert Redfield, los cuales definen al campesinado como parte de una sociedad mayor, urbana, a la cual los une el mercado. Estas sociedades campesinas, aunque dirijan la mayor parte de su producción al autoconsumo, también participan de la producción capitalista, pero se conservan como culturas parciales con una identidad, integración y apego a la tierra y a sus cultivos<sup>20</sup>.

Tabla 2. Resumen tendencias conceptuales de la nueva tradición de estudios campesinos

Nueva tradición de estudios campesinos		
Tendencia	Exponentes	Concepción de “campesino” y/o campesinado
Campesinistas / Populismo marxista	Alfred Kroeber y Robert Redfield  Teodor Shanin, Alexander Chayanov, Harriet Friedmann, Eric Wolf y Eric Hobsbawm	<ul style="list-style-type: none"> <li>El campesinado es parte de una sociedad mayor, a la cual lo une el mercado. Aunque la mayor parte de su producción se dirija al autoconsumo, participa del capitalismo, pero se conservan como culturas parciales con una identidad, integración y apego a la tierra y a sus cultivos.</li> <li>De acuerdo con una interpretación multilineal del proceso histórico, el modo de producción campesino, se desarrolla en el marco de la estructura social del capitalismo.</li> </ul>
Descampesinistas	Alain de Janvry, Luís A. Crouch y Jhon Richad Heath	<ul style="list-style-type: none"> <li>El campesinado no representa un modo de producción sino que es un grupo en transición del comunismo primitivo al proletariado.</li> <li>El campesinado es un grupo social reconocible, caracterizado por la no separación del productor y los medios de producción, uso del trabajo familiar, y no explotación de uno por otro, que, por lo general, se encontraba explotado como grupo, por otra clase.</li> <li>En la medida en que los miembros individuales pasen a relacionarse entre sí y los capitalistas vía relación salarial, empezaría a desaparecer el campesinado como grupo.</li> </ul>
Estrategias de hogar	Rigoberto Rivera	<ul style="list-style-type: none"> <li>El grupo doméstico es una unidad de decisiones sociopolíticas y de producción – consumo.</li> <li>Enfatiza al campesinado como sujeto social más que en la economía agrícola campesina, en la cual el campesino no sólo está compuesto por agricultores sino también por pequeños comerciantes, trabajadores asalariados agrícolas y migrantes circulares urbanos, actividades que pueden ser realizadas por una misma persona</li> </ul>

<sup>20</sup> Sevilla Guzmán, Eduardo. (2004). Sobre la evolución del concepto de campesinado en el pensamiento socialista: una aportación para vía campesina. Pág. 23.

		y/o en el seno de una misma unidad doméstica.
Diferenciación social histórica	Luis Llambí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existen múltiples campesinos, toda vez que cada período histórico en el proceso de acumulación de capital, ha generado sus propios sujetos rurales. Así los campesinos son productos históricos específicos con múltiples génesis y trayectorias variables.</li> <li>Hay tres procesos de acumulación de capital experimentados por los campesinos de América Latina:               <ol style="list-style-type: none"> <li>un primer régimen primario exportador de materias primas agrícolas o minerales, en el que existieron dos clases de campesinos: comunidades indígenas corporativas y campesinos parcelarios, junto a formas de explotación agrícola como la hacienda, la estancia, la plantación, etc.</li> <li>Proceso de industrialización sustitutiva orientada al mercado interno en el que a través de reformas agrarias, la colonización de nuevas fronteras agrícolas y modernización de la incipiente producción mercantil, se produjo una ampliación del campesinado sobre todo parcelario en zonas alejadas y de difícil acceso.</li> <li>Proceso actual de diversificación de productos exportables y de mercados a través de nuevas formas y mercados de trabajo agrícola que flexibilizó las condiciones de contratación con el pago a destajo, el trabajo estacionario y formas particulares de aparcería; se eludieron las regulaciones sociales y se generaron formas precarias de salarización.</li> </ol> </li> </ul>
Neopopulismos: agroecología	Angel Palerm Eduardo Sevilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>El campesinado aparece como una forma de relacionarse con la naturaleza, al considerarse como parte de ella en un proceso de coevolución.</li> <li>El campesinado es una categoría histórica por su condición de saber mantener las bases de reproducción biótica de los recursos naturales.</li> </ul>

Dichos estudios generaron un fuerte debate académico en torno a la vigencia y pervivencia o no del campesinado, que se agrupó en dos tendencias diferenciadas: campesinistas y descampesinistas. A tales tendencias, algunos autores les han signado equivocadamente un enfoque de análisis exclusivamente economicista del campesinado<sup>21</sup> (cf. Salgado y Prada, 2000). Más recientemente, esa discusión se intentó superar con estudios multidisciplinarios del campesinado desde las “estrategias de hogar”, diferenciaciones socio - históricas y enfoques agroecológicos.

Según Sevilla Gúzmán (s.f. a.), los descampesinistas, con Alain de Janvry, Luís A. Crouch y Jhon Richad Heath a la cabeza, analizaron con un criterio funcionalista marxista la acumulación del capital bajo la estructura centro – periferia, dentro de la cual consideraron que la cuestión agraria era un problema de clases de la periferia y el proceso de acumulación que subyace a la misma. Con ello, al igual que el marxismo

---

<sup>21</sup> Salgado Carlos y Esmeralda Prada. 2000. “Campesinado y protesta social en Colombia 1980 – 1995”. Bogotá: CINEP. En ese enfoque atribuyen a dichos análisis un enfoque exclusivamente económico, ver pp. 37 y 38. Igual sentido se puede observar el trabajo de Rigoberto Rivera en su ensayo “Campesinado: el enfoque de las estrategias de hogar”. (1989). En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.12 No. 3. Bogotá, Septiembre – Diciembre. Págs. 328 – 329.

agrario ortodoxo, vaticinaron el ocaso del campesinado<sup>22</sup>. Plantearon a este último como un grupo social reconocible, caracterizado por la no separación del productor y los medios de producción, uso del trabajo familiar, y no explotación de uno por otro, que generalmente, se encontraba explotado como grupo, por otra clase. Pero en la medida en que los miembros individuales pasasen a interactuar entre sí y los capitalistas, vía relación salarial, empezaría a desaparecer el campesinado como grupo y se integrarían como proletarios a pesar de las resistencias parciales<sup>23</sup>.

Los estudiosos de la corriente campesinista, también denominada populismo marxista (Teodor Shanin, Alexander Chayanov, Harriet Friedmann, Eric Wolf y Eric Hobsbawn), afirman a la economía campesina como un modo de producción que subsiste y se desarrolla al lado del modo de producción capitalista, particularizando a aquella por su carácter familiar y de subsistencia. Sin embargo aclaran que la economía familiar campesina no necesariamente se dirige a su empobrecimiento al servicio de la acumulación de otros lejanos, en tanto algunas características de la agricultura y de la vida social rural, pueden proporcionar ventaja a economías no capitalistas, sobre formas de producción capitalistas en un mundo capitalista. Las relaciones sociales de producción, y de la producción simple de mercancías agrarias, están basadas en los vínculos familiares (de género y generación), lo que permite sus posibilidades de continuidad, independiente de que su producción esté mercantilizada<sup>24</sup>.

A finales de los noventa del siglo pasado, en un valioso esfuerzo por superar el debate entre campesinistas y descampesinistas, surgieron interesantes estudios que analizaron al sujeto campesino desde marcos específicos, tales como las “estrategias de hogar”, que lo analizó desde un enfoque antropológico, desde la historia a partir de la

---

<sup>22</sup> Sevilla Guzmán, Eduardo. 2004. Sobre la evolución del concepto de campesinado en el pensamiento socialista: una aportación para vía campesina. Pág. 27.

<sup>23</sup> Crouch, Luís A., y De Janvry, Alain. (1979). El debate sobre el campesinado: teoría y significación política. En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.2 No. 3. Bogotá, Septiembre – Diciembre. Pág. 290.

Heath, John Richard. (1987). Reproducción y diferenciación de la economía campesina: esbozo de un nuevo enfoque y aplicación a tres casos latinoamericanos. En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.10 No. 1. Bogotá, Enero – Abril. Págs. 6 – 7.

<sup>24</sup> Sevilla Guzmán, Op. Cit. Pág. 30.



“diferenciación social histórica”, y desde la ecología con la “agroecología”. Sin embargo, es importante puntualizar que los marcos analíticos relacionados antes, constituyen un ineludible contexto y/o punto de partida.

Desde el enfoque de las “estrategias de hogar”, Rigoberto Rivera (1989) privilegia el análisis del grupo doméstico, entendiéndolo como una unidad de decisiones sociopolíticas y de producción – consumo. Pone énfasis en el campesinado como sujeto social más que en la economía agrícola campesina, en la cual el campesino no sólo está compuesto por agricultores sino también por pequeños comerciantes, trabajadores asalariados agrícolas y migrantes circulares urbanos, actividades que pueden ser realizadas por una misma persona y/o en el seno de una misma unidad doméstica<sup>25</sup>. Es decir, las estrategias de hogar son un modo alternativo de organizar los recursos, en el que a cada integrante le corresponde relativamente un determinado proceso diferenciado social y económicamente<sup>26</sup>. Dicha tesis pronto fue criticada por establecer al hogar/familia como un ente sin contexto, pues el énfasis que tiene la comunidad rural en la toma de decisiones, técnicas, políticas, sociales y económicas son determinantes<sup>27</sup>.

La “diferenciación social histórica”, define y explica al campesino en los marcos de los procesos de acumulación que ha experimentado el capitalismo, contextualizados para la realidad latinoamericana por Luis Llambí (1990). Este autor señala que es un falso dilema definir qué es un campesino pues existen múltiples campesinos, toda vez que cada período histórico en el proceso de acumulación de capital, ha generado sus propios sujetos rurales<sup>28</sup>. Entonces éstos son productos históricos específicos con múltiples

---

<sup>25</sup> Rivera A, Rigoberto. (1989). Campesinado: el enfoque de las estrategias de hogar. En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.12 No. 3. Bogotá, Septiembre – Diciembre. Pág. 327.

<sup>26</sup> *Ibíd.* Pág. 337.

<sup>27</sup> Salgado y Prada, Op. Cit. Pág. 40.

<sup>28</sup> Si bien dicha noción es adoptada a los estudios rurales latinoamericanos por Luis Llambí, el concepto de que cada etapa de acumulación capitalista trae consigo su propio campesino ya había sido tratado principalmente por George Dalton en 1972, en su ensayo “*Peasants in Anthropology and History*”, en *Current Anthropology*, Vol. 13 No. 3/4. Citado por Archetti, Eduardo Pedro. 1978. Una visión general de los estudios sobre el campesinado. En: *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol. 1. No. 1. Pág. 9.

génesis y trayectorias variables<sup>29</sup>. Distingue las transformaciones de éstos, en tres procesos de acumulación del capital experimentados por los diferentes campesinos en América Latina: un primer régimen primario exportador de materias primas agrícolas o minerales, hasta la década del 30 del siglo pasado; un segundo proceso, de industrialización sustitutiva, orientado al mercado interno, mediante el cual se buscaba la exportación de unos pocos productos y el abastecimiento interno de algunas materias primas de origen agrícola, período en el cual se desarrollaron las reformas agrarias implementadas en varios países; y un tercero, aún vigente, dirigido a la diversificación tanto de productos exportables como de los mismos mercados<sup>30</sup>. Para éste autor a pesar de hacer parte de tales procesos de acumulación capitalista continentales, no es posible desarrollar una categoría teórica universal de una forma laboral y sujeto campesino, sino elaborar descripciones y definiciones históricas, propias a cada formación social, en cada estadio de su desarrollo.

Bajo el régimen primario exportador, Llambí distingue dos clases de campesinos: uno vinculado a las comunidades indígenas corporativas, que han mantenido sus tradiciones socio-culturales en determinada territorialidad; y un segundo campesino, parcelario, que ha sido en gran medida producto tanto de la desintegración de los grupos indígenas originales como de repoblamiento, mestizaje y reestructuración social<sup>31</sup>. El autor resalta las formas productivas terratenientes en que se vieron vinculados los campesinos de la época: la hacienda, la plantación y la estancia, las cuales generaron sus propios sujetos campesinos (peón, criado, jornalero, etc.); forma que a su vez se transformaron con la descomposición o transformación de cada uno de estos modos de producción terratenientes<sup>32</sup>.

El proceso de industrialización orientada al mercado interno, experimentado por los países de América Latina, a partir de la década del 30 del siglo pasado, obligó a los

---

<sup>29</sup> Llambí, Luís. 1990. Procesos de transformación del campesinado latinoamericano. En: Bernal, Fernando. (Compilador). *El campesinado contemporáneo. Cambios recientes en los países andinos*. Bogotá: Cerec, Tercer Mundo Editores. Pág. 47.

<sup>30</sup> Ibídem. Pág. 48.

<sup>31</sup> Ibídem. Pág. 51.

<sup>32</sup> Ibídem. Págs. 52 – 53.

Estados, a la reestructuración de la agricultura bajo tres programas: la reforma agraria, la colonización de las nuevas fronteras agrícolas y la modernización de la pequeña producción mercantil<sup>33</sup>. Estos programas cambiarían las condiciones del campesinado, pues éste accedió a la tierra, en el primer caso, bajo la descomposición del latifundio o su transformación en empresas agroindustriales. El sistema latifundista no vio problema en entregar a los campesinos las tierras inaccesibles o no aptas para la una producción industrial. En el segundo caso, simplemente se concedió el acceso a la tierra en lugares alejados de los mercados y de difícil acceso, y bajo maneras informales de tenencia de la misma. Finalmente sólo un pequeño grupo de campesinos se benefició con el acceso a la tierra, de patrones tecnológicos en sus procesos de producción, así como el acceso a los mercados de productos, generando ingresos superiores a los del promedio salarial agrícola, bajo los denominados procesos de producción.

Bajo el actual modelo de diversificación tanto de productos exportables como de mercados, orientados por procesos de apertura económica, desregulación estatal y globalización neoliberal, se generó un impacto sobre el campesinado que se evidenció en cuatro procesos: liberación del mercado de tierras, consolidación de la regulación oligopólica en las relaciones agrocomerciales y agroindustriales, surgimiento de nuevos nichos de reproducción social en los mercados domésticos y de exportación, y las nuevas formas de inserción del campesinado en los mercados de trabajo<sup>34</sup>. Situación que ha incidido en el trabajo del campesino, pues se flexibilizaron las condiciones de contratación con el pago a destajo, el trabajo estacionario y formas particulares de aparcería; se eludieron las regulaciones sociales y se generaron formas precarias de salarización. Por estas condiciones, el campesinado tuvo la necesidad de complementar sus ingresos prediales, ganó mayor movilidad para buscar trabajo, y se dio una fuerte incorporación del hogar al mercado laboral, especialmente por parte de las mujeres<sup>35</sup>.

Recogiendo las elaboraciones teóricas de los campesinistas, surgió una nueva vertiente teórica denominada Neopopulismo, precedida por Ángel Palerm, Juan Martínez Alier y

---

<sup>33</sup> Ibíd. Pág. 57.

<sup>34</sup> Ibíd. Pág. 69.

<sup>35</sup> Salgado y Prada, Op. Cit. Pág. 47.

Eduardo Sevilla Guzmán, que pretende definir el campesinado desde una perspectiva agroecológica y sintetizar los estudios predecesores<sup>36</sup>.

Palerm, acogiendo la tesis de la concepción multilineal del proceso histórico y el modo de producción campesino elaborado por A. Chayanov, señala como presupuesto básico de la agroecología, que el campesinado no sólo subsiste, modificándose, adaptándose y utilizando las posibilidades que le ofrecen la expansión y transformación del propio capitalismo, sino que también subsiste mediante a la ventajas económicas que posee frente a las grandes empresas agrarias. Tales ventajas se refieren a que produce y usa su propia energía, que incluye su propio trabajo y la reproducción de la unidad doméstica de trabajo y consumo. Por tanto, el planteamiento agroecológico señala que en contraste con los más modernos sistemas de producción rural, las culturas tradicionales campesinas tienden a implementar y desarrollar sistemas ecológicamente correctos para la apropiación de los recursos naturales<sup>37</sup>.

Bajo tales presupuestos, Sevilla Guzmán (2004) define al campesinado más que una categoría histórica o un sujeto social, como una forma de manejar los recursos naturales vinculada a los agroecosistemas locales y específicos de cada zona, utilizando un conocimiento sobre dicho entorno condicionado por el nivel tecnológico de cada momento histórico y el grado de apropiación de dicha tecnología, generándose así distintos “grados de campesinidad”<sup>38</sup>. Estos “grados de campesinidad” han sido analizados por Víctor Manuel Toledo, de acuerdo con un grupo de indicadores entre las cuales están la energía usada, la escala o tamaño del ámbito espacial y productivo de su manejo, la autosuficiencia, la naturaleza de la fuerza de trabajo, la diversidad, la productividad ecológica – energética, y del trabajo, los productos de desechos o capacidad de reacomodo y reciclaje de los residuos, la naturaleza del conocimiento, y la cosmovisión. Tales indicadores que habrían de ser aplicados al modo de uso campesino

---

<sup>36</sup> Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f. a. Redescubriendo a Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico. Pág. 236. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de:

<http://moviments.net/espaimarx/docs/33ebd5b07dc7e407752fe773eed20635.pdf>

<sup>37</sup> Sevilla Guzmán, Op. Cit. Pág. 31 – 32.

<sup>38</sup> Ibídem. Pág. 33.

y el modo de uso industrial, también denominando terciario, en el manejo de los recursos naturales<sup>39</sup>.

De todas estas perspectivas, y en términos generales para el objetivo de este trabajo, se puede extraer que estos análisis multidisciplinarios aceptan que el campesino es un grupo social diferenciado, que se caracteriza por un modo de producción propio, en el que se conjuga la tierra como medio de producción (ya sea propia, ajena, o mediante procesos de tenencia informales), y el uso del trabajo propio y familiar (diversificado por género y generación), con el cual se genera una economía de subsistencia y/o de excedentes que se intercambian en los mercados, que pueden generar resistencias de acuerdo al grado de integración con dichos mercados, que poseen una identidad y culturas parciales caracterizados por el apego a la tierra, aunque hagan parte de una sociedad mayor en la cual realizan sus relaciones de intercambio y sociales, y finalmente que realizan una apropiación ecológicamente más sostenible y racional sobre el ambiente, que el modo de producción capitalista.

### **1.1.2 Los campesinos o trabajadores rurales desde la legislación colombiana y los organismos multilaterales (OIT y ONU)**

Los debates académicos sobre el campesinado se tornan relevantes en la medida en que permiten comprender y contextualizar la adopción que sobre el mismo ha tomado el establecimiento, desde su legislación y jurisdicción, y de paso el tratamiento que brinda a los pobladores rurales. En igual sentido, representan un marco de referencia frente al desarrollo que ha tenido en los organismos multilaterales de los cuales Colombia hace parte, principalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien la Constitución Política de 1991 no desarrolla un concepto de campesino, si se refiere al mismo en su artículo 64, haciendo también referencia a los trabajadores agrarios, norma que se enmarca dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, mediante la cual se ordena al Estado la promoción progresiva de la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, la seguridad social, la educación, crédito,

---

<sup>39</sup> Ibíd. Pág. 35.

comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial, todo ello, según la disposición constitucional, para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. De allí se desprende que la noción del campesino equivale a la del trabajador agrario, son el mismo sujeto cuyo objetivo social es la producción de alimentos, para lo cual es necesario proporcionarle el acceso a su activo básico, la tierra, más activos públicos como vías de comunicación, asistencia técnica y crédito.

De las leyes que desarrollan tal precepto constitucional (Ley 101/93, Ley 160/94 y Ley 1152/07), ninguna realiza explícitamente una definición de campesinos o trabajadores agrarios, pues replican el tratamiento dado a tales conceptos por la norma constitucional. En este sentido se pueden resaltar los artículos 38 y 103 de la Ley 160/94<sup>40</sup>, mediante las cuales se establecen dos formas de explotación agrícola, una mediante la denominada Unidad Agrícola Familiar (UAF) y otra mediante empresas comunitarias. Señalan que en la primera para su explotación sólo requiere del trabajo del propietario y su familia y eventualmente mano de obra externa; y para la segunda forma, que la explotación sea realizada por el trabajo de sus socios, los cuales serán campesinos de escasos recursos económicos.

A su vez, dentro del sistema judicial colombiano, no existe una definición de campesino o trabajador rural, por la justicia ordinaria. Sólo la Corte Constitucional en varias jurisprudencias<sup>41</sup> ha estudiado y caracterizado a la población campesina principalmente desde un enfoque economicista y obviamente desde una perspectiva de derechos, bajo los cuales éste es un productor y por tanto trabajador agrícola al cual se le debe garantizar el acceso a la tierra en que trabaja, que por diversos factores, principalmente sociales y económicos, entre otros aspectos porque gran parte de dicha población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por lo cual los considera sujetos de especial protección constitucional que deben tener un tratamiento diferenciado por parte del Estado y las Instituciones públicas.

---

<sup>40</sup> Publicada en el Diario Oficial No. 41.479, de 5 de agosto de 1994, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

<sup>41</sup> Entre las más relevantes frente al tema encontramos las siguientes: C – 021/94, C – 006/02, C – 180/05, C – 1006/05, C – 644/12 y la T – 348/12.

En tal sentido en la sentencia C – 644/12, la corte señaló:

*“En definitiva, como se advierte de lo expuesto, el orden constitucional establecido con relación al campo destaca al campesino como sujeto de especial protección constitucional, como personas vulnerables por sus condiciones sociales y económicas. En no pocos aspectos en todo caso, su tratamiento jurídico constitucional y legal es diverso y no sobre todo ello habrá de pronunciarse la Corte en esta ocasión. (...) Con todo, esta precisión debe servir para entender el valor que los trabajadores de la tierra poseen en el Estado colombiano y para su discurso constitucional. Por todo ello, el campesino y su relación con la tierra debe privilegiarse y hacer parte de las prioridades de políticas económicas de intervención, en pos tanto de la igualdad material del Estado social de derecho (art. 1º C.P.), como de incorporarlos en los procesos productivos y los beneficios del mercado y el ejercicio de las libertades económicas y empresariales.”*

Siendo más específica, la Corte Constitucional caracterizó al trabajador del campo como el protagonista principal del sector agropecuario, al cual, señala, debe dársele un tratamiento diferenciado dadas sus tradicionales condiciones de miseria y exclusión social, así en la sentencia C – 021/94, reproducida luego en las sentencias C – 006 de 2002 y C – 1006/05, se dijo que:

*la Constitución Política de 1991, otorga al trabajador del campo y en general al sector agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción que encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad no sólo jurídica sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores económicos y de que la intervención del Estado en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social.*

De lo citado, se extrae que si bien el estado colombiano no ha establecido una definición específica de campesino, sí caracteriza al mismo al menos de forma genérica, incluso a partir de la propia Constitución Política, como trabajador agrario el cual se encarga principalmente de la explotación de la tierra mediante el trabajo propio y el de su familia

en procesos principalmente agropecuarios, por lo cual se le debe entregar progresivamente la propiedad de la tierra junto con procesos de asistencia técnica. Considera igualmente que a dicho grupo social se le debe dar un trato diferencial frente a otros actores de la sociedad debido a su histórica condición de exclusión y pobreza.

Con ello podemos decir que el estado colombiano no adopta una definición concreta del sujeto social campesino, aunque del tratamiento que da a éste se acerca a la tradición economicista en la cual se conjugan la familia como unidad de producción – consumo y la tierra como medio de producción, dejando de lado todas las relaciones sociales, políticas, culturales y ecológicas que se presentan en lo que podríamos denominar territorios campesinos, pues como vimos con Redfield, el campesino tiene una cultura parcial como parte de una sociedad mayor y a la cual permanece integrado, en términos económicos, culturales y políticos y en la que desarrolla una identidad bajo la cual las relaciones sociales y el apego a la tierra y a sus cultivos son determinantes, es decir, el campesino percibe la tierra y el territorio como una opción de vida.

Ello en términos prácticos hace que el gobierno propicie políticas orientadas exclusivamente dentro del plano económico de los sectores agrícolas y pecuarios, y ellos en el marco de los procesos de acumulación del capital, inhibiendo el acervo socio – cultural de los campesinos, lo que lleva a desconocerlos como sujetos colectivos de derechos y relegando la importancia que los mismos tienen en el desarrollo social del país. Incluso los limita en el plano económico cuando desconoce la apropiación sostenible de recursos naturales como por ejemplo cuando prescribe la minería tradicional.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los pocos años de su creación<sup>42</sup> se ocupó de los trabajadores rurales mediante el Convenio No. 11 de 1921, relativo a “*los derechos de asociación (agricultura)*”. En su artículo 1°, este instrumento señaló que el mismo se aplica a “todas las personas ocupadas en la agricultura”.

Posteriormente la Recomendación 101 de 1956 sobre la “*formación profesional (agricultura)*” se estableció dentro del campo de aplicación de la misma que

---

<sup>42</sup> Como se sabe, la Organización Internacional del Trabajo fue creada el 1919 en la parte XIII del Tratado de Versalles (Arts. 387 a 487) que puso fin a la primera guerra mundial.



*el programa de formación profesional en la agricultura debería abarcar a toda la población agrícola, sin distinción de raza, religión, nacionalidad o sexo, y cualquiera que sea su relación jurídica con la tierra, a saber, los agricultores y trabajadores agrícolas y las personas que piensan dedicarse a la agricultura, comprendidos los trabajadores de temporada y las mujeres, así como los trabajadores empleados en ocupaciones estrechamente relacionadas con la agricultura.*

Mediante la Recomendación No. 132 de 1968, la OIT se encarga de forma específica de dos figuras de trabajadores rurales, los arrendatarios y aparceros, mediante la cual propugnaba por el mejoramiento de la vida de dichos trabajadores.

Sólo hasta los documentos preparatorios del que fuese el Convenio 141 que la OIT, a través de la Oficina Internacional del Trabajo, dicho organismo reconoce la necesidad de definir qué se entiende por trabajadores rurales. Es así que en el Informe VI (1) de 1973 presenta un documento preparatorio para la 59ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1974), el cual titula “*Organización de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social*”, en el cual de forma expresa define qué entiende dicho organismo por trabajadores rurales, indicando que

*la expresión «trabajadores rurales» abarca a todas las categorías de trabajadores dedicados a tareas agrícolas y ocupaciones similares, tanto si son asalariados como si trabajan por cuenta propia (incluidos los aparceros, los arrendatarios y los pequeños propietarios cultivadores), siempre que, en el caso de quienes trabajan por cuenta propia, ellos y su familia realicen la mayor parte del trabajo agrícola, aunque contraten a trabajadores eventuales para ciertas operaciones o el trabajador por cuenta propia trabaje como asalariado durante parte del año<sup>43</sup>.*

---

<sup>43</sup> Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, informe VI (1). 1973. Organización de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 7.

Este concepto fue modificado ligeramente por los debates que se realizaron en el trámite para adoptar el convenio 141, el cual de forma expresa definió en su artículo 2° qué es un trabajador rural:

### **Artículo 2**

1. *A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios.*
2. *El presente Convenio se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:*
  - a) *no empleen una mano de obra permanente; o*
  - b) *no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o*
  - c) *no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.*

Por su parte el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución No. 16/27 encargo al Comité Consultivo de los Derechos Humanos de la ONU, para que “*viera la conveniencia de preparar una Declaración o nuevo instrumento jurídico destinado a la protección y desarrollo de las campesinas, campesinos y sus comunidades, al igual que otras personas que viven y trabajan en el mundo rural, como son los asalariados agrícolas –temporeros y temporeras–, pescadores artesanales, cazadores, pastores, en fin, grupos rurales.*”<sup>44</sup>. Es así que el 24 de febrero de 2012, el Comité Consultivo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó de forma unánime la “*Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos*”, por lo que tal declaración se encuentra en manos del

---

<sup>44</sup> Bengoa, José. 2012. Declaración internacional de los derechos campesinos. Fuente electrónica, vía campesina, <http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1294-declaracion-internacional-de-los-derechos-campesinos>, 28/09/2013.

Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo, el cual lo debe presentar a la asamblea general para su aprobación final<sup>45</sup>.

Se debe resaltar que dicho documento es fruto del trabajo de campesinos de base de todo el mundo, toda vez que el texto aprobado por el Comité Consultivo de los Derechos Humanos de la ONU, proviene de la organización internacional Vía Campesina, que agrupa organizaciones de campesinos de todos los continentes. Por lo que dicha declaración es básicamente el texto aprobado por el quinto congreso de tal organización campesina adelantado en Maputo – Mozambique, entre el 16 y el 23 de octubre de 2008, además del arduo trabajo adelantado por tal organización para que el mismo se convirtiera en un instrumento jurídico internacional en el marco de los derechos humanos.

A pesar de que dicha declaración aún no se haya aprobado por la Asamblea General de la ONU, el documento en sí ya constituye un referente, pues es la primera vez que dicho organismo realiza una definición concreta y en extenso de “campesino”, tal como lo establece el artículo 1° de la misma, el cual señala:

***“Artículo 1. Definición de campesinos***

*1. Campesino es un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agro-ecológicos.*

*2. El término “campesino” puede aplicarse, hombre o mujer, a toda persona que practica la agricultura, la ganadería o la trashumancia, que produce artesanías relacionadas con la agricultura o que desarrolla otras ocupaciones similares en zonas rurales. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan en la tierra.*

---

<sup>45</sup> A la fecha, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está preparando el documento para presentarlo ante la Asamblea General para su discusión, votación y aprobación de este documento jurídico internacional.

*3. El término “campesino” también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, las siguientes categorías de personas se consideran sin tierra y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: 1. familias de agricultores con poca tierra o sin tierra; 2. familias no agrícolas en áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la provisión de servicios; 3. otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos itinerantes, cazadores y recolectores, y personas con medios de subsistencia similares”.*

Revisando los análisis expuestos atrás en torno a la categoría campesino, creemos que es un falso dilema considerar al trabajador rural como un sujeto social con características diferentes al campesino pues representan una categoría de análisis totalmente análoga. Como se pudo observar a partir del recorrido teórico realizado, el campesino ineludiblemente para ser considerado como tal, necesariamente obtiene su ingreso o subsistencia por cuenta propia, utilizando su trabajo, el de su núcleo familiar u otras formas de pequeña escala de organización del trabajo, en procesos de explotación de la tierra, así como de la apropiación de los recursos agroecológicos de que dispone en su territorio, por lo cual tiene márgenes de autonomía en su producción. De manera que, al menos para este trabajo, la categoría campesino será totalmente equivalente a la de trabajador rural.

En consecuencia el trabajo agrícola (y las relaciones que genera) es un factor determinante en el ser y la sociedad campesina a través del cual se generan procesos de identidad que los lleva a reconocerse y relacionarse tales, dentro de las cuales se despliega por lo menos un saber hacer que se materializa principalmente en: laborar la tierra, generar productos inmediatos de consumo y materias primas, producir su propio sustento, posibilidad y necesidad de enajenar su fuerza de trabajo y la de su familia vinculándola a diversas formas de relaciones sociales de trabajo y producción, y la posibilidad y necesidad de desarrollar relaciones familiares de diverso grado y circuitos

comunales de mayor o menor extensión y complejidad; todos los cuales necesariamente se realizan a través del vínculo con la tierra<sup>46</sup>.

Por tanto, el denominar al campesino como trabajador rural es asumido por la OIT en su marco misional de regular el trabajo humano y las relaciones laborales, estableciendo principios y estándares en el trabajo dentro de su estructura tripartita (trabajadores, empresarios y gobiernos). Ello tiene aplicabilidad en las distintas realidades de sus países miembros, por tanto los documentos preparatorios del convenio 141 y la discusión que se dio en los debates para la aprobación por parte de los diferentes miembros de éste instrumento se apto por denominar al campesino como trabajador rural, en atención al trabajo humano que estos desarrollan<sup>47</sup>.

## 1.2 Categorías de campesinos o trabajadores rurales en Colombia

Con apoyo en los debates esbozados en torno a la definición del campesinado, como de su equivalencia con los trabajadores rurales, se hace necesario analizar y definir sus principales categorías en Colombia. Para ello nos basaremos principalmente en las diversas modalidades de relación con la tierra y las formas de trabajo que se adoptan, así como las posibles regulaciones formales que han tenido las mismas en nuestro país.

Previamente, es oportuno tener presente la noción sobre campesinos o trabajadores rurales para luego si intentar establecer sus categorías. Para ello se acude a la puntual y englobante definición que presenta Sevilla Guzmán (s.f. b.), al precisar al campesinado como aquel segmento social integrado por unidades familiares de producción y consumo cuya organización social y económica se basa en la explotación agraria del suelo, independientemente de que posean o no la tierra y de la forma de tenencia que las

---

<sup>46</sup> Salgado, Carlos; Prada, Esmeralda. (2000). Campesinado y protesta social en Colombia 1980 – 1995. Bogotá: CINEP. Pág. 55.

<sup>47</sup> En tal sentido la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, estableció que “*Los trabajadores rurales son ante todo trabajadores, esto es, que mediante su trabajo ganan con que alimentar, albergar y vestir a sus familias y así mismos. Son trabajadores rurales todos los que se dedican en las regiones rurales a tareas agrícolas o a ocupaciones conexas, sea como asalariados o por cuenta propia.*” Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Pág. 3.

vincule a ella, y cuya característica de relaciones sociales se desarrolla en comunidades rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia, y en muchos casos de explotación, con el resto de la sociedad en términos de poder político, cultural y económico<sup>48</sup>.

Sevilla Guzmán (s.f. b.) establece varias categorías de campesinos a las cuales define como grupos sociales que coexisten, y cuya naturaleza está determinada por la posición que cada uno ocupe en las relaciones de producción en los distintos tipos de empresas agrarias. A esas categorías las agrupa en dos grandes segmentos: campesinos con y sin tierra. Así, *arrendatarios*, *aparceros* y *pequeños propietarios* son grupos sociales diferentes, todos ellos campesinos, que constituyen el segmento social de campesinos con tierra, y sus unidades operan a través de la fuerza de trabajo familiar. Mientras tanto, el segmento de unidades jornaleras, constituye la categoría social de campesinos sin tierra<sup>49</sup>.

Tabla 3. Categorías de campesinos o trabajadores rurales según Sevilla Guzmán.

<b>Categorías de campesinos o trabajadores rurales por Sevilla Guzmán</b>	
<b>Campesinos con tierra</b>	<b>Campesinos sin tierra.</b>
Arrendatarios	Jornaleros
Aparceros	
Pequeños propietarios	

Sin embargo las fronteras entre las categorías sociales de campesinos con tierra y sin tierra son bastante difusas, pues las familias campesinas que operan en sus unidades agrícolas como arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios, pueden parcial o totalmente asumir el rol de jornalero, en circunstancias tales como que la producción no

<sup>48</sup> Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f. b. Para una definición sociológica de campesinado. Págs. 28 – 29. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de <http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/18%20Para%20una%20definici%C3%B3n%20sociol%C3%B3gica%20de%20campesinado.pdf>

<sup>49</sup> Ibídem. Pág. 29

satisface las necesidades del núcleo familiar, que se desea obtener algún excedente, o en temporadas de cosechas en medianas o grandes explotaciones.

Usualmente se señala que en Colombia existen principalmente cuatro categorías de trabajadores rurales: i) el propietario del pequeño o mediano fundo, incluso bajo condiciones precarias de tenencia de la tierra como los colonos, ii) los arrendatarios, iii) los aparceros, y iv) los comúnmente denominados jornaleros (las tres primeras categorías han sido ampliamente determinadas y caracterizadas, no así con la última, como se verá). Sin embargo, hay diversidad de formas de tenencia y de contratos laborales en el agro, que siguiendo las condiciones sociales y culturales, amplían estas cuatro categorías básicas, o al menos las complejizan.

Del autor precedente se ha tomado una clasificación inicial que agrupa a campesinos con o sin tierra. Los primeros pueden tener título de propiedad o poseerla bajo formas indirectas de tenencia (arrendamientos, aparcería, etc.). De igual manera, se aplicó la diferenciación entre formas de trabajo independiente o por cuenta propia, y forma de trabajo dependiente o asalariada. Bajo estas ordenaciones se establecieron las categorías de campesinos o trabajadores rurales para nuestro país.

Tabla 4. Categorías campesinos o trabajadores rurales en Colombia para este análisis*. <b>Campesinos o trabajadores rurales en Colombia</b>		
<b>Con/sin tierra</b>	<b>Categorías de independientes**</b>	<b>Categorías de dependientes (asalariados)</b>
Con tierra	-Pequeños propietarios -Arrendatarios -Aparceros -Amedieros aportantes de la tierra	
Sin tierra	-Amedieros aportantes de semillas -Trabajadores por surcos ("a la quinta", "a la séptima", "a la novena", etc.)	-Jornaleros y/o asalariados rurales.

\*Esta clasificación se presenta a manera de propuesta, que deberá profundizarse y complementarse con estudios sociológicos, económicos y antropológicos, en diversas regiones del país.

\*\*En esta categoría se encuentran inclusive los trabajadores rurales con condiciones precarias de tenencia de la tierra como los colonos.

En la presente clasificación se encuentran excluidos los grandes propietarios de tierra por razones concretas y formales, pues su trabajo en los espacios rurales se limita exclusivamente a la administración, obteniendo su ganancia a partir de la explotación de la mano de obra campesina, de igual forma porque fueron excluidos de forma expresa por el literal b del artículo 2 del convenio 141 de la OIT, al señalar que se tendría como

trabajadores rurales a los que no emplearan mano de obra numerosa o con carácter estacional. En este mismo sentido y justificación, están descartados los obreros agrícolas que trabajan en la agroindustria (palmicultora, azucarera, etc.).

Las dinámicas sociales que genera el trabajo en el campo en Colombia ha permitido otras categorías de trabajadores rurales diferentes a las convencionales, que si bien no han sido desarrolladas desde los análisis académicos, si constituyen relaciones sociales y económicas reconocidas en diversos territorios campesinos, tales como los “amedieros” y los trabajadores rurales “al quinto”, “al séptimo”, “al noveno”, etc., con vigorosa vigencia en regiones con micro división de tierras como por ejemplo en el altiplano Túquerres-Ipiales al sur occidente del país. Formas de trabajo campesino que explicaré más adelante.

Como ya se ha enunciado, **el propietario** del pequeño o mediano fundo es aquel que posee y explota directamente la tierra bajo técnicas rusticas o modernas mediante su propio trabajo, el de su familia o eventualmente contratando de forma temporal a otros propietarios o jornaleros para labores específicas, por lo general para épocas de siembra y cosecha. Dentro de esta categoría también cabe el poseedor de la tierra en condiciones precarias de tenencia como el colono, el cual explota la tierra sin que posea el título de la misma, es decir sin que sea el “legítimo dueño de ésta”.

En iguales condiciones que el propietario, los **arrendatarios y aparceros** explotan la tierra, pero esta categoría de campesinos no son propietarios de la tierra y reconocen la propiedad en cabeza de un tercero principalmente un terrateniente con el cual formalizan, así sea de forma verbal, contratos de arrendamientos o de aparcería, y cancelan el canon de los mismos en efectivo, en especie, o en trabajo, de igual forma pueden cancelar su canon combinando estas tres formas de pago, así como los que pagan en especie pueden convenir como forma de pago una parte del producto, o los que pagan en efectivo y una parte convenida del producto<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Las modalidades de remuneración de dichos trabajadores rurales hace que se les determine como tales, así lo tiene contemplado el Convenio No. 132 (1968), que habla precisamente sobre esta categoría de trabajadores.



Dentro de la legislación colombiana sólo se definieron las categorías de *arrendatarios* y *aparceros* a partir del Decreto No.703/68 reglamentario de la Ley 135/61 y la Ley 1° de 1968 por medio de las cuales se estructuró la reforma agraria de la época, en la cual se establecía que poseían la calidad de arrendatarios, aparceros o similares los que exploten extensiones que no excedieren las 15 hectáreas, incluso si se encuentran cubiertas por cultivos de carácter permanente siempre y cuando paguen al dueño de los terrenos una determinada contraprestación en dinero, especie o servicios prestados personalmente o por su cuenta.

Posteriormente la Ley 6 de 1975, Ley que ha sido denominada como contrarreforma agraria, derogó las anteriores normas y de paso su decreto reglamentario, y llevó la definición de arrendatarios y aparceros al plano de los contratos civiles, en el cual dos personas libres concurren a establecer las condiciones contractuales dentro del marco de un negocio jurídico, así el artículo 1° de dicha Ley establece que la “*aparcería es un contrato mediante el cual una parte que se denomina propietario acuerde con otra que se llama aparcero, explotar en mutua colaboración un fundo rural o una porción de éste con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación*”. Definición que de contera se aplica a los arrendatarios.

Sin embargo, a pesar de que la Ley 6 de 1975 llevó las definiciones de *arrendatario* y *aparcero* al mundo de los negocios civiles, con las formalidades que demandan los mismos<sup>51</sup>, en la práctica dichas modalidades de trabajadores rurales continúan celebrando dichos acuerdos de forma verbal y cancelando en contraprestación en dinero, especie o trabajo, por sí mismos o terceras personas a cargo del aparcero o arrendatario, o combinando dichas modalidades de pago como ya se advirtió; formas y modalidades de pago que hacen distintiva la categoría de *arrendatarios* y *aparceros*.

Por su parte, la categoría **jornaleros** es la más problemática, toda vez que los enfoques descampesinistas rechazaban que a esta categoría social se les denominase campesinos, argumentando que ella es una muestra de la descomposición del

---

<sup>51</sup> El artículo 26 de la Ley 6 de 1975 estableció que tales contratos debían constar por escrito y ser autenticados ante un Juez o el Alcalde.

campesinado. Incluso algunos de los mayores exponentes de los campesinistas, si bien reconocían que los jornaleros poseían algunas características del campesinado, aseguraban que no se les podía considerar como tal sino como un grupo analíticamente marginal<sup>52</sup>.

Sin embargo los Neopopulistas aceptan a la categoría jornalero como parte del campesinado bajo dos criterios, el primero por la similitud que tiene con otros trabajadores agrícolas que poseen la tierra bajo una forma indirecta de tenencia como los arrendatarios, aparceros y cualquier categoría que le sea asimilar, pues comparten con ellos la misma suerte de ser explotados a partir de la extracción del excedente que genera su trabajo por parte de los dueños de la tierra, que en la mayoría de los casos, la apropiación de la tierra por parte de éstos, tiene una clara dimensión de dominación de clase. El segundo criterio se da a partir de la dimensión sociocultural, pues el jornalero como las otras categorías de campesinos tiene un sistema de relaciones sociales característico basado en la fuerza de las relaciones familiares, de vecindad, vínculos de amistad y cooperación unidos en general a la economía campesina de subsistencia, lo que puede explicar en términos prácticos que en momentos de polarización los campesinos con tierra más pobres y los campesinos sin tierra se unan en acciones de protesta y violencia, es decir que actúan realizando una clara acción de clase<sup>53</sup>.

La OIT también se refiere a este tipo de trabajadores rurales como asalariados del sector rural, señalando que se reconocen como tales, siempre y cuando se dediquen en las regiones rurales a tareas agrícolas o a ocupaciones similares o conexas. La Oficina Internacional del Trabajo señaló que “*son asalariados del sector rural todos los*

---

<sup>52</sup> Teodor Shanin. (1971). Peasants, delineation of a sociological concept and a field of study. En *European Journal of Sociology*. Vol. XII. Pág. 197-8. Citado por Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f.b. Para una definición sociológica de campesinado. Pág. 30. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de

<http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/18%20Para%20una%20definici%C3%B3n%20sociol%C3%B3gica%20de%20campesinado.pdf>

<sup>53</sup> *Ibidem*. Págs. 30 – 32.

*trabajadores permanentes, estacionales, temporeros u ocasionales empleados en tareas agrícolas o en ocupaciones similares o conexas y remunerados con un salario (...)”<sup>54</sup>.*

La Oficina también extiende la denominación de jornaleros a aquellas personas que aun teniendo acceso a la tierra, ésta no alcanza a proporcionar los medios de subsistencia al trabajador y a su familia:

*Jornaleros sin tierra son los que habitan en zonas rurales pero que, por no tener acceso a la tierra de ninguna forma – la propiedad, el arrendamiento, la aparcería, el cultivo en común –, para obtener medios de vida tienen que trabajar en calidad de asalariados. En la práctica pueden también considerarse jornaleros sin tierra a quienes no tienen acceso sino a una parcela tan pequeña, que no proporciona los medios de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia<sup>55</sup>.*

En consecuencia, aceptando los parámetros argumentativos y empíricos que denotan que la categoría *jornalero* hace parte del campesinado, nos acercamos a la definición que sobre éste desarrolla Lozano (1998). Él afirma que esta categoría de campesino la conforman principalmente trabajadores rurales con tierra o sin ella, quienes presentan las siguientes características: ambos estar vinculados a la tierra y los procesos de trabajo que allí se desarrollan, compartir su condición de asalariados de forma temporal durante la permanencia en una actividad económica rural específica, generalmente sus contratos de trabajo se establecen de forma verbal, sin ninguna formalidad jurídica siendo su pago a destajo o por día/hombre, pueden ser estacionales vinculándose a actividades específicas en determinadas épocas del año como las cosechas.

Volviendo sobre la diversidad de formas campesinas en nuestro país, que plantean la necesidad de no establecer fronteras rígidas entre las categorías de campesinado, se ha referido a manera de ejemplo a los “amedieros” y trabajadores “a la quinta”, “a la séptima”, “a la novena”, etc. Los “**amedieros**” son campesinos que trabajan la producción agrícola por mitades: el propietario de la tierra la aporta en el contrato productivo,

---

<sup>54</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Pág. 3.

<sup>55</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Pág. 4.

mientras que el otro socio aporta la totalidad de las semillas; tanto los abonos como el trabajo requerido para la producción son aportados en mitades iguales y los excedentes también son divididos en igual forma. Usualmente en el aporte en trabajo es empleada la unidad familiar de cada socio “amediero”<sup>56</sup>. El socio aportante de semillas no cabe dentro de la categoría de jornalero puesto que no es acreedor a un jornal en una relación propietario – trabajador, sino que es parte igual en la relación productiva entre amedieros, lo mismo que el propietario de la tierra que no se asume como patrono en esa misma relación. De igual manera resulta difícil fijar a los amedieros en las categorías de campesinos sin tierra/con tierra, pues uno de los socios es poseedor de la misma mientras el otro no.

Los **trabajadores “al quinto”, “al séptimo”, “al noveno”**<sup>57</sup>, etc., pactan con el dueño del terreno, entregar cada quinto, cada séptimo, cada noveno surco de su producción (o el que apalabren dependiendo de la extensión de lote a cultivar) a cambio del “préstamo” de la tierra para labrarla. Es decir, el dueño de la tierra sólo tiene que prestarla por el tiempo del cultivo y recibe a cambio lo que se produzca cada cierto número de surcos según lo que pacten con el que la cultivará. El cultivador aporta semillas, abonos y trabajo (en el que generalmente intervienen los miembros de su familia), y debe entregar lo producido cada cinco, siete o nueve surcos, según lo acordado a cambio del “préstamo de la tierra”<sup>58</sup>.

Los *trabajadores por surcos* no son propietarios pero tampoco son jornaleros de los propietarios y la relación entre unos y otros, se asume social y comunitariamente como un pacto entre iguales, pues los propietarios no se entienden como patronos ni los trabajadores “por surcos” se entienden como jornaleros. Habría que estudiarse la hipótesis de considerar esta relación como una forma de arrendamiento o de aparcería. Mientras tanto se han notado aquí dos ejemplos de la diversidad de formas campesinas y la imprecisión de las fronteras entre categorías de trabajadores rurales en Colombia.

---

<sup>56</sup> Comunicación personal con los antropólogos Pinchao Alexander y Francy García., febrero 2014.

<sup>57</sup> Las comunidades rurales del sur de Nariño se refieren a esta numeración en términos femeninos teniendo en cuenta que a los surcos se les denomina “melgas”. Ibíd.

<sup>58</sup> Ibíd.

Resulta notorio que no se conocen mediciones estadísticas en el sector agrícola de dichas categorías de campesinos (propietarios, arrendatarios y aparceros, jornaleros, amedieros, etc.), a pesar de que algunas son reconocidas formalmente. Ello impide establecer las necesidades, participación, importancia e injerencia económica, política, social, diferenciación de género, de cada una de ellas dentro del sector rural, toda vez que se toma de forma general la categoría campesino sin realizar dicha distinción.

Precisamente las condiciones de vida y trabajo de las diversas categorías de campesinos en Colombia, presentaría un marco socio histórico importante para dimensionarlas y posicionarlas en contexto. De esa manera se entendería por qué, por ejemplo, es posible encontrar *amedieros* o *trabajadores por surcos* en ciertas partes del país y no en otras.

### 1.3 Condiciones de los trabajadores rurales en Colombia

Los trabajadores rurales en Colombia han vivido una permanente, histórica y sistemática exclusión. Estas condiciones se evidencian desde diversos análisis de corte económico, político y social<sup>59</sup>. En este acápite se presentarán de manera sintética tales condiciones a partir de dos aspectos que se consideran transversales, incluso a dichos estudios, como lo es la pobreza de los trabajadores rurales y la estructura agraria en Colombia.

La estructura agraria en nuestro país se rige por sistemas tradicionales de relaciones sociales y productivas, aunados a una precaria presencia del estado como eje articulador (por lo menos en cuanto a procesos productivos se refiere), razón por la cual el control sobre la tenencia de la tierra<sup>60</sup> como recurso, se expresa en poder político, violencia, desconocimiento de derechos, además se usa como un bien especulativo, como fuente de riqueza, poder y prestigio<sup>61</sup>. Esta situación, históricamente ha generado un régimen de tenencia de la tierra de carácter bimodal, es decir, se privilegia el aumento exponencial tanto de la grande como de la pequeña propiedad rural y el estrangulamiento y la fragmentación de la mediana propiedad, estructura conflictiva y poco eficiente que no

---

<sup>59</sup> PNUD (2011), Op cit.; Salgado y Prada (2000); Forero (2010); Machado (2008); “*La Cuestión Agraria Hoy, Colombia: Tierra sin Campesinos*” de autores varios.

<sup>60</sup> Entendida tenencia de facto o mediante relaciones jurídicas de propiedad.

<sup>61</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD –. 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano. Bogotá. Pág. 181

potencia el crecimiento económico de los trabajadores rurales, destruye los recursos económicos y desvaloriza lo rural<sup>62</sup>.

Tabla 5. Estructura de la propiedad según rangos de las unidades agrarias familiares (UAF) <sup>63</sup>.

<b>ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SEGÚN RANGOS UAF</b>			
<b>Rango UAF<sup>64</sup></b>	<b>Área (%)</b>	<b>Predios (%)</b>	<b>Propietarios- poseedores (%)</b>
Microfundio	10,59	80,49	78,31
Pequeña Propiedad	19,1	13,66	14,72
Mediana Propiedad	18,2	4,99	5,83
Gran Propiedad	52,2	0,86	1,15
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Machado, Absalón. 2009.

Esa concentración de la tierra productiva en pocas manos (especialmente para ganadería y recientemente para la agroindustria y la minería industrial), ha representado el origen histórico del conflicto interno que aqueja a nuestro país desde hace más de medio siglo. En esa dinámica, los campesinos han sido víctimas (cf. Salgado y Prada, 2000), pero también han participado de la misma como actores activos, especialmente en zonas de asiduo conflicto.

A su vez, tal régimen de tenencia de la tierra, determina el uso del suelo, bajo el cual la tierra no se concibe como un bien de producción, si no que se emplea para la especulación, el poder político y el control del territorio, por lo cual su uso es

<sup>62</sup> Machado, Absalón. 2009. La reforma rural, una deuda social y política. CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

<sup>63</sup> PNUD, (2011). Op. Cit. Pág. 206

<sup>64</sup> La UAF (Unidad Agrícola Familiar), fue definida por la Ley 160/94 como "la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere", por lo cual está varía de acuerdo a la región.

generalmente ineficiente e irracional, dedicado principalmente al sector de la ganadería, actividad que genera menos aportes al valor de la producción agrícola nacional que la agricultura ejercida por los campesinos, a pesar de que use más del 100% de la tierra apta para tal actividad.

Tabla 6. Uso del suelo en Colombia<sup>65</sup>.

<b>USO DEL SUELO EN COLOMBIA</b>		
<b>Actividad económica</b>	<b>Uso total de la tierra declarada apta para la actividad económica</b>	<b>Aporte total a la producción agrícola nacional</b>
Agricultura	24%	63,4%
Ganadería	+100%	26,6%

Fuente: Machado, Absalón. 2009.

Aunado a tal panorama, las políticas públicas se han inclinado por un modelo de desarrollo urbano – industrial, relegando a los trabajadores rurales a la producción de alimentos, materias primas y mano de obra barata, ignorando los intereses y modos de vida campesinos. De esta manera los desconoce como sujetos socio – culturales y articuladores de derechos, privilegiando en su lugar, a los empresarios agroindustriales, que han irrumpido con fuerza en el mundo rural a partir de la apertura económica, al considerar que sus actividades consolidan una verdadera economía nacional basada en cultivos de carácter permanente y exitosos en términos de exportación, por lo cual los poderes económicos y políticos siempre se han buscado tener un campo sin campesinos (Moncayo, 2008). Todo ello se suma al hecho de que las economías terratenientes y especulativas del agro, tienen sobre – representación en las instancias decisivas de las políticas públicas del sector, en las cuales son claras las expresiones de sus representantes a favor del mantenimiento del *status quo* en dicha estructura agraria<sup>66</sup>.

Tales condiciones problemáticas han generado una subvaloración del papel de la población trabajadora rural en el desarrollo nacional, excluyéndolos de procesos de desarrollo económico y social. Ello se expresa en las limitaciones del acceso a la propiedad de la tierra, al capital, la tecnología y los mercados, el deterioro de su

<sup>65</sup> Machado, (2009). Op. Cit. Pág. 126.

<sup>66</sup> PNUD, (2011). Op. cit. Pág. 191

importancia y reconocimiento como sujeto político, la exclusión de los beneficios de programas de desarrollo rural, programas de formación y de salud, la visión del trabajador rural solo como mano de obra barata más no como una población con capacidad productiva para los mercados, lo que sumado a los procesos de violencia y despojo de su patrimonio y las incapacidades de cumplir sus obligaciones crediticias con el sector financiero, ha conducido a la población rural a procesos marginación, migración, producción de cultivos ilícitos e incluso a la incorporación a grupos armados como respuesta a su situación.

Estas problemáticas han llevado a una “*falla de reconocimiento*” de los pobladores rurales, es decir falta de valoración y reconocimiento de un sujeto particular que pueda dar peso a sus derechos, a sus especificidades y a su constitución de ciudadanía, lo que a su vez genera una “*falla de redistribución*” consistente en negar la redistribución de activos a favor del sujeto no valorizado que permita a la sociedad a integrarlo en sus procesos de desarrollo<sup>67</sup>.

Tal falla de redistribución de activos, dentro de los cuales se encuentra además de la tierra la asistencia técnica, conlleva a que el sector rural presente niveles de pobreza y pobreza extrema<sup>68</sup> mucho más elevados que los que registran los sectores urbanos, los cuales para el 2010 registraban niveles preocupantes.

Tabla 7. Niveles de pobreza y pobreza extrema en Colombia para 2010<sup>69</sup>.

<b>NIVELES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN COLOMBIA 2010</b>		
<b>Sector</b>	<b>Nivel de pobreza</b>	<b>Nivel de pobreza extrema</b>
Urbano	30,3%	7%
Rural	46,1%	22,1%

Fuente: Parra Peña, Rafael Isidro. 2013.

<sup>67</sup> PNUD, (2011). Op. Cit. Págs. 115 – 116.

<sup>68</sup> Se entiende por pobreza lo indispensable para sobrevivir, y por pobreza extrema cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir, como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. De acuerdo con los estándares del Banco Mundial se está en la Pobreza Extrema si se vive con menos de US\$1 al día.

<sup>69</sup> Parra Peña, Rafael Isidro. 2013. Pobreza, brechas y ruralidad en Colombia. En: Coyuntura Económica: Investigación Económica Y Social. Volumen XLIII, No. 1. Págs. 15 – 36. Recuperado el 02 de mayo de 2014 de: [http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/11/Pobreza-bechas-y-ruralidad-en-Colombia-Parra-Pe%C3%B1a-R.-et-al.-pp.-15-36-C-E-Junio-2013\\_Web.pdf](http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/11/Pobreza-bechas-y-ruralidad-en-Colombia-Parra-Pe%C3%B1a-R.-et-al.-pp.-15-36-C-E-Junio-2013_Web.pdf)



Estos niveles de pobreza en el sector rural, obedecen a variados factores tales como un ingreso per cápita de solo el 30% del registrado en el sector urbano, un tamaño de hogar mucho más grande que el urbano (4,2 y 3,9 miembros por familia), menores niveles de educación (4,3 frente a 7,3), y la falta de servicios públicos como agua y alcantarillado<sup>70</sup>.

Sin embargo, a pesar de que los niveles de pobreza son más acentuados en el campo con relación a los presentados en las ciudades, podemos señalar de acuerdo a la información de la tabla 6 sobre el uso del suelo en nuestro país, que los trabajadores rurales presentan altos índices de eficiencia y productividad en el sector agropecuario pues, a pesar de contar con cantidades restringidas de tierra, su aporte a la producción agrícola nacional supera en más del 100% al registrado por el sector pecuario. Por ello, coincidimos con estudios recientes (Gáfaró, Ibáñez y Zarruk, 2012) que afirman que el bienestar de los hogares rurales depende principalmente del acceso y uso de la tierra de los trabajadores rurales, por lo cual se hace necesario una reforma agraria democrática que entregue y distribuya la tierra entre los trabajadores rurales, siendo ello un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de estos y sus familias. A ello debería llevar la vinculación activa a través de sus organizaciones como se establece en el preámbulo del Convenio 141 de la OIT.

---

<sup>70</sup> López Castaño, Hugo y Núñez Méndez, Jairo. 2007. Pobreza y desigualdad en Colombia diagnóstico y estrategias. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Pág. 125.



## **2. El convenio 141 de la OIT, sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales**

El Convenio 141 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de asociación y libertad sindical para los trabajadores agrarios, es el producto de una serie de debates y pujas por interpretar y reglamentar la temática, desde esferas supranacionales. En este capítulo, se presentan los antecedentes del convenio, la manera en que fue elaborado y normado; ello brinda un panorama de los poderes e intereses que alimentan los debates sobre el mismo. De igual manera se hace un análisis normativo del convenio, las organizaciones comprendidas y los ámbitos de aplicación personal y material; con el fin de brindar un marco sobre lo que éste posibilita y ordena. Finalmente se presentan casos diferentes del proceso de su aplicación en dos países latinoamericanos (México y Guatemala) que lo han ratificado, para ofrecer algunos ejemplos contrastivos, que sirvan al análisis posterior sobre el caso colombiano.

### **2.1 Antecedentes del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT**

Los antecedentes del Convenio 141 y la Recomendación 149 que lo complementa, datan de la misma creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ésta, en varios de sus instrumentos internacionales, ya había tratado el tema de los trabajadores rurales, así como una serie de solicitudes de otros organismos internacionales y multilaterales y de los propios trabajadores, para que se asegurara el derecho de asociación de los trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social.

Así, el primer instrumento relativo al derecho de asociación en el trabajo, fue adoptado justamente para los trabajadores agrícolas, mediante el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura) 1921 (núm. 11). Este señala en su primer artículo que,

*Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio, se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas.*

De acuerdo con tal instrumento, ese derecho no sólo se aplica a los trabajadores asalariados, sino a también a las personas que trabajen por cuenta propia, tales como arrendatarios, aparceros, trabajadores independientes, y demás modalidades de campesinos. Sin embargo, a pesar de ser un referente para el derecho de asociación para los trabajadores rurales, el mismo tuvo en la práctica un alcance limitado, pues al poner en pie de igualdad a éstos con los trabajadores de la industria, sólo se podían beneficiar de forma efectiva del derecho de asociación, en la medida en que tal derecho ya se hubiese acordado con los trabajadores industriales (Valticos, 1977).

Más de dos décadas después, se crearon los instrumentos más importantes y relevantes que ha producido la OIT en referencia a la libertad sindical, el Convenio No.87 de 1948, relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio No.98 de 1949, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, dentro de los cuales obviamente se encuentran cobijados a los trabajadores rurales.

Estos “convenios básicos” de la libertad sindical, han adquirido el rango de fundamentales, al hallar expresión en los instrumentos internacionales más importantes, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, Arts. 2 y 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, Art. 8), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966), y en el plano regional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1979).

Según la terminología de la OIT, el instrumento básico sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación, el Convenio 87, señala en el ámbito de su aplicación personal (Art.2º), que “*los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola*

*condición de observar los estatutos de las mismas*". Disposición que comprende tanto a los trabajadores asalariados como a los independientes, dentro de los cuales se advierten los trabajadores rurales en su conjunto.

Frente a este punto, el representante del Secretario General de la Conferencia Internacional del Trabajo, en el marco de la segunda discusión del Convenio 141, celebrada en la 60ª reunión de la Conferencia en 1975, señaló que:

*A partir de la segunda guerra mundial, ha habido tendencia a dar a la expresión «trabajador» el sentido más amplio posible en los instrumentos de la OIT. Se admitió que, en el caso de que un instrumento no se refiera exclusivamente a los asalariados, el término «trabajador» podría abarcar a los trabajadores independientes, a menos que el instrumento en cuestión lo disponga de otra manera. De tal modo, se admitía que el Convenio núm. 87 se aplicaba a todos los que ganasen su vida trabajando. También era común considerar como «trabajador agrícola» a toda persona que obtiene sus medios de existencia directamente de las faenas agrícolas, independientemente de su vínculo jurídico con la tierra. Además, el campo de aplicación de la Recomendación sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132), ha sido definido dentro de este orden de ideas<sup>71</sup>.*

A este instrumento fundamental lo continuó otro de no menos importancia, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949, núm. 98), el cual prevé que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Así mismo, protege a las organizaciones de empleadores y trabajadores contra todo acto de injerencia de unas respecto a las otras, y estatuye la utilización de procedimientos de negociación colectiva y voluntaria.

---

<sup>71</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1975. Informe IV (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 7, párr. 11.

Dos años después, vio la luz el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura) (1951, núm. 99). Éste dispone que se deban establecer o conservar métodos adecuados, que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones afines. Complementario de éste instrumento, se expidió el Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura) (1952, núm. 101), el cual dispuso que los trabajadores empleados en empresas agrícolas y en ocupaciones afines, deberán disfrutar de vacaciones anuales pagadas, después de un período de servicio continuo con un mismo empleador, período que deberá ser determinado por la legislación de cada país (Art. 3).

Posteriormente mediante el Convenio sobre las plantaciones (1958, núm. 110), se establecieron las condiciones de empleo de los trabajadores ocupados en las plantaciones, con el fin de facilitar la aplicación de otros convenios en las mismas, entre los cuales se encuentran los Convenios 87 y 98, tal como lo prevé el artículo 54 de dicho Convenio. Sin embargo, al establecer que el término plantación comprende toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical, tal instrumento dejó por fuera a los trabajadores rurales de otras regiones, que no se ubican en tales latitudes. A pesar de lo anterior, la adopción de este Convenio, constituyó un avance de grandes proporciones, pues además de garantizar los derechos de libertad sindical a los trabajadores ocupados en las plantaciones, estableció normas mínimas sobre contratación y reclutamiento, fijación de salarios, vacaciones anuales pagadas, descanso semanal, protección a la maternidad, indemnización por accidentes de trabajo, inspección del trabajo, vivienda y asistencia médica<sup>72</sup>.

Otros instrumentos que tratan sobre trabajadores rurales son:

- a. La Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo) (1966, núm. 127), relativa al papel que deben jugar las cooperativas en el progreso económico y social de los países en vías de desarrollo; instrumento que establece la creación y expansión de cooperativas, las cuales deberían ser concebidas como un instrumento

---

<sup>72</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Pág. 20.

importante para el desarrollo económico, social y cultural, así como para el progreso humano en tales países.

b. La Recomendación sobre los arrendatarios y aparceros (1968, núm. 132), consideró que uno de los objetivos de la política social y económica, debería consistir en promover el mejoramiento continuo y progresivo del bienestar de los arrendatarios, aparceros y categorías similares de trabajadores rurales, así como en garantizarles el más alto grado posible de estabilidad y seguridad en el trabajo, y en los medios de subsistencia<sup>73</sup>.

c. El Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura) (1969, núm. 129), y la Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura) (1969, núm. 133), prevén la inclusión en dicho sistema de inspección de la agricultura, a agentes y representantes de las organizaciones de sindicatos.

A su vez, desde la década del 60 del siglo pasado, diversas conferencias regionales de la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como organismos de los trabajadores, instaron a la OIT a adoptar un mecanismo que protegiera y principalmente promoviera el derecho de sindicación de los trabajadores rurales y que, a su vez, los vinculara como agentes activos en el desarrollo económico y social.

Una de las primeras en pronunciarse en tal sentido, fue la Comisión Permanente Agrícola de la OIT<sup>74</sup> en 1965, la cual estudió el papel de las organizaciones agrícolas en el desarrollo económico y social de las zonas rurales, y recomendó medidas legislativas,

---

<sup>73</sup> OIT. 1996. Convenio Núm. 141 y su aplicación en México y Filipinas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123423.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123423.pdf)

<sup>74</sup> Frente a dicha comisión, “Los esfuerzos de la OIT por obtener la colaboración de las organizaciones agrarias dieron por resultado, en primer lugar, la creación de una Comisión mixta de la OIT y del Instituto Internacional de la Agricultura, lográndose la colaboración de los empleadores y de los trabajadores, así como de otros grupos de población del medio campesino. Desaparecida después de la II Guerra Mundial, la sustituyó la una Comisión Permanente Agrícola, con representantes del Consejo de Administración de la OIT, del Instituto Nacional de Agricultura y de los organismos internacionales competentes. Su función es actuar como órgano de consulta del Consejo para hacer progresar la labor de la Conferencia en todos los temas que afecten al trabajo agrícola”. Recuperado el 13 de abril de 2014, de: [http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/17300\\_16.pdf](http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/17300_16.pdf)

educativas y de otro tipo, para fomentar el desarrollo de organizaciones rurales sólidas e independientes<sup>75</sup>.

La séptima Conferencia Regional Asiática de la OIT (Teherán, 1971), adoptó una resolución relativa a la promoción de las organizaciones de trabajadores rurales y de campesinos en Asia. En ésta, solicita a la OIT que amplíe su programa de asistencia a las organizaciones de trabajadores rurales y de campesinos. También en 1971, la Reunión de Consultores sobre Educación Obrera de la OIT, recomendó que se desarrollara un programa de educación obrera destinado a los trabajadores rurales y a los campesinos. Además, exhortó la OIT, a que realizara una acción eficaz e imaginativa para alentar y asistir a las organizaciones de trabajadores rurales y de campesinos, a fin de que éstas pudieran crear y mantener instituciones y programas educativos proporcionales a la magnitud de los problemas planteados en esta esfera<sup>76</sup>.

Sin embargo, uno de los informes más relevantes fue el desarrollado por el Comité Especial sobre Reforma Agraria de la FAO, publicado en agosto de 1971, en el cual solicita a la OIT que,

*Preste especial atención a la eliminación de las restricciones que existan a la libertad de asociación de los trabajadores rurales. A tal efecto, estudiará los problemas relativos a las organizaciones campesinas, las fortalecerá por medio de actividades educativas y promoverá más estrechas relaciones entre los sindicatos y las cooperativas, lo mismo que entre los sindicatos urbanos y las organizaciones rurales<sup>77</sup>.*

Al año siguiente del informe del Comité Especial sobre Reforma Agraria de la FAO, la Conferencia Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, en un memorando presentado a la 57ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, instó a la OIT “a adoptar enérgicas medidas para eliminar todos los obstáculos que se oponen al

---

<sup>75</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 2.

<sup>76</sup> *Ibíd*em, Pág. 2.

<sup>77</sup> FAO: Reporte del Comité Especial sobre Reforma Agraria. 1971. Documento C1693/11.71/E/1/1700. Roma. Págs. 40 – 41.



*establecimiento de organizaciones de trabajadores rurales, y a promover el establecimiento de procedimientos institucionales para garantizar la participación efectiva de las organizaciones rurales en la planificación y aplicación de políticas económicas, sociales y agrarias.”*<sup>78</sup>.

Bajo el marco anterior, el Consejo de Administración<sup>79</sup> de la Oficina Internacional del Trabajo, en su 188ª reunión realizada en Ginebra en Noviembre de 1972, decidió inscribir en el orden del día<sup>80</sup> de la 59ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en 1974, el punto titulado “*Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social*”. Para esto, encargó a la Oficina Internacional del Trabajo, la preparación de un detallado documento<sup>81</sup> sobre este preciso punto, con el fin de que pudiese ser discutido por la Conferencia con arreglo a la doble discusión prevista en el artículo 39 de su Reglamento. La Oficina preparó en 1973 el informe preliminar VI (1) denominado justamente “*Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social*”, el cual fue remitido a los Estados miembros con un concreto cuestionario, en el que se indagaba acerca de la necesidad de establecer un instrumento normativo al respecto, y qué forma debería adoptar el mismo, a fin de poder ser debatido el año siguiente en la reunión anual de la Conferencia.

En el informe preliminar VI (1), la Oficina Internacional del Trabajo realizó una caracterización de los trabajadores rurales: identificó los principales problemas que aquejan a estos trabajadores, así como las clases de organizaciones que éstos han desarrollado, y puso de presente la necesidad, principalmente de los países en vías de desarrollo, de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores, para lo

---

<sup>78</sup> Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. La Organización Internacional del Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires. Pág. 340.

<sup>79</sup> El Consejo de Administración de la OIT, es un organismo creado por la constitución de la OIT, en su artículo 2º, es de carácter tripartito, artículo 7º, y es el encargado de dirigir a la Oficina Internacional del Trabajo, organizar las conferencias internacional del trabajo estableciendo el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, presentar informes para su discusión, entre otras actividades.

<sup>80</sup> Tal facultad le está dada a la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud del artículo 14 de la Constitución de la OIT.

<sup>81</sup> La preparación de los documentos que deberá debatir la Conferencia Internacional del Trabajo están a Cargo de la Oficina Internacional del Trabajo, quien lo realiza por expreso mandato del Consejo de Administración, ello de acuerdo al Lit. del No. 2 del Art. 10 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

cual consideró que era necesario garantizar su participación activa en el proceso de desarrollo. La oficina indicó que,

*para mejorar la situación de los trabajadores rurales y conseguir su integración en el esfuerzo de desarrollo nacional son necesarias organizaciones de trabajadores rurales fuertes, independientes y representativas, y la estructura que permita la intervención de dichas organizaciones a todos los niveles y en todas las etapas del proceso de desarrollo. El reconocimiento de la importante función de las organizaciones de trabajadores rurales y la garantía de que dichas organizaciones podrán actuar y ampliarse con la más completa libertad son requisitos esenciales, para vencer la resistencia de los intereses creados y llevar a cabo las modificaciones necesarias para el éxito del desarrollo*<sup>82</sup>.

Así mismo, el informe precisó una serie de obstáculos que deben enfrentar los trabajadores rurales, que impiden o imposibilitan la organización de éstos. Entre tales inconvenientes, se encuentran problemas de índole legislativo y administrativo, así como económicos, sociales y políticos. Dentro de los problemas legislativos y administrativos, reconoce que si bien en la mayoría de los países las Constituciones políticas garantizan a los ciudadanos el derecho de asociación, la legislación laboral no siempre lo facilita, y no siempre se aplica. Señala, entre otros, que un obstáculo en tal sentido, es exigir un número mínimo de trabajadores para crear un sindicato, especialmente donde los trabajadores agrícolas están diseminados y aislados. En otros países sólo se reconoce el derecho de asociación a los trabajadores agrícolas asalariados, y en algunos, la interpretación que se hace de la Ley, impide a los trabajadores rurales formar organizaciones profesionales.

El informe igualmente señala que, dentro de los obstáculos sociales, culturales y económicos, se relacionan el aislamiento en que se encuentran algunos o la mayoría de los trabajadores rurales, los altos índices de analfabetismo, que genera la ignorancia de sus derechos constitucionales y legales, y la fuerte oposición de algunos gobiernos y de

---

<sup>82</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 16.

muchos empleadores o grandes propietarios rurales, principalmente de países en vías de desarrollo, para que se establezcan y amplíen las organizaciones de trabajadores rurales, pues temen de ellas que modifiquen las estructuras agrarias tradicionales. Así mismo, identifica como obstáculo, la escasez de dirigentes capaces de ayudar a los trabajadores rurales a organizarse en asociaciones de una u otra clase para la defensa de los intereses de estos trabajadores<sup>83</sup>.

Frente a ésta última clase de obstáculos, la Oficina señaló que,

*los trabajadores rurales, incluso cuando están organizados en sindicatos o en otras organizaciones similares, han tenido que luchar por sobrevivir y para que se reconozcan sus derechos. A causa de su importancia numérica, es grande su peso político, y probablemente es ésta la razón por la que las autoridades en cierto número de países consideran con reservas y desconfianza sus organizaciones y el motivo por el que dichas organizaciones encuentran la hostilidad, la represión y la violencia declaradas de ciertos propietarios agrícolas o de la nueva clase dirigente urbano-rural, cuyos componentes, aunque pueden no poseer tierras, deben su situación a la acumulación de capital originada por actividades agrícolas e invertido después en actividades comerciales o industriales de carácter no agrícola*<sup>84</sup>.

En relación con tales obstáculos, el informe expone algunas medidas de resorte nacional e internacional, que pueden ayudar al fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales, para aumentar su participación en el desarrollo social y económico. Señala que a nivel nacional, uno de los objetivos de la política de desarrollo rural, debe ser el de fomentar y favorecer la creación y desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz para garantizar la participación de éstos en el desarrollo económico y social, por lo cual considera que se deben adoptar medidas de índole legislativo y administrativo, y poner en práctica el fomento de estas organizaciones. Dentro de estas medidas, se encuentra el fortalecimiento de un sistema

---

<sup>83</sup> Ibídem. Págs. 40 – 48.

<sup>84</sup> Ibíd. Pág. 48.

bien organizado de inspección laboral en la agricultura, con la inclusión en la misma de funcionarios que provengan del seno de las organizaciones rurales. Otra medida, es modificar el número de miembros para la formulación de sindicatos, donde las condiciones de aislamiento hagan difícil cumplir las que se encuentran establecidas en la normatividad. Unas disposiciones finales, proponen impedir la exigencia de requisitos financieros para la constitución de sindicatos donde ello se exija, al igual que el requisito del alfabetismo, entre otras<sup>85</sup>.

El informe puso de relieve la importancia de la reforma agraria, la distribución de la tierra y la modificación de los sistemas de cultivo, indicando que,

*las organizaciones de trabajadores rurales de todo tipo, particularmente en América latina y Asia, prestan particular atención a la reforma agraria y a la redistribución de la tierra, y se admite en general que sin una reforma de estructuras se retrasará el desarrollo rural, en el sentido amplio de la expresión. Por otro lado, para ser efectivos, los cambios de estructura en la agricultura requieren el apoyo y la participación de las organizaciones populares. Así, las organizaciones de trabajadores rurales pueden conseguir que las leyes de reforma agraria se elaboren y apliquen en pro de los intereses verdaderos de quienes trabajan la tierra: trabajadores sin tierra, aparceros, arrendatarios y pequeños propietarios<sup>86</sup>.*

Dentro de las acciones internacionales se resalta el esfuerzo hecho por organizaciones internacionales de sindicatos agrícolas, así como el informe del Comité Especial sobre Reforma Agraria de la FAO, publicado en agosto de 1971. Este señala que por parte de la OIT, se estudiará la posibilidad de prestar asistencia a los gobiernos en cuanto al establecimiento y consolidación de bases legislativas e institucionales de la participación de trabajadores rurales en el desarrollo económico y social, así como la capacitación directa a las diferentes categorías de trabajadores rurales<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Ibíd. Págs. 58 – 64.

<sup>86</sup> Ibíd. Pág. 31.

<sup>87</sup> Ibíd. Págs. 64 – 66.

En consecuencia el Consejo de administración, formuló 18 preguntas que fueron enviadas a los Estados miembros de la OIT, con el fin de usar las respuestas para elaborar un informe a la conferencia y proponer para su discusión una propuesta de instrumento. Las respuestas brindadas por los diferentes estados miembros, así como las conclusiones preparadas sobre la base de sus respuestas, fueron recogidas en el Informe VI (2), dentro de las cuales se estableció el papel de las organizaciones de trabajadores rurales, las medidas para promover las mismas, legislativas y administrativas, y mecanismos de enseñanza y participación. Tal vez lo más importante fue que se concluyó que el instrumento debería adoptar la forma de una recomendación<sup>88</sup>, que como se sabe no es de carácter obligatoria, sino una guía para los gobiernos en esta materia.

En el sexto punto del orden del día de la 59ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 1974, se discutieron los informes VI (1) y VI (2), relativos a las *organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social*. En este punto de la reunión, existieron múltiples solicitudes de enmiendas desde los Estados, los empleadores y trabajadores; de las cuales quizás la más relevante, fue la presentada por los empleadores. En tal enmienda, solicitaban precisar mejor el campo de aplicación del texto propuesto, para lo cual propusieron reemplazar la expresión «organizaciones de trabajadores rurales» por el de «organizaciones rurales», pues según ellos, con la misma se ampliaba la gama de situaciones cobijadas por el instrumento. Esa enmienda fue rechazada, bajo el entendido de que con la misma se cambiaría el sentido de los objetivos del instrumento que era proteger a los más pobres, y con la modificación propuesta, se abarcaría también a los grandes empleadores y terratenientes.

A su vez, los representantes gubernamentales de la entonces Unión Soviética (URSS), propusieron modificar las conclusiones consagradas en el informe VI (2), en el sentido de la adopción de un convenio complementado, en lugar de una recomendación. Esta enmienda fue apoyada por los trabajadores, bajo el entendido de que: a) la adopción de una recomendación podía no tener ningún efecto en los países en vías de desarrollo,

---

<sup>88</sup> Consejo de Administración de la OIT. 1974. Informe VI (2): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Págs. 67 – 72.

mientras que un convenio tendría mayor peso moral y tendría fuerza de ley en caso de ratificación; b) cuestiones tan importantes como las relativas a las organizaciones de trabajadores rurales, y su función en el desarrollo económico y social, merecían ser objeto de un convenio; c) si un instrumento reviste la forma de convenio, el gobierno que lo ratifique, incluso cuando cambie de orientación política, siempre está obligado a aplicarlo, y sólo puede desligarse de las obligaciones correspondientes denunciándolo; d) los demás instrumentos mencionados en la introducción del Informe VI (I), como por ejemplo el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura) (1921, núm. 11), son en su mayor parte convenios. Por consiguiente, se pronunciaron firmemente en favor de un convenio básico, relativo a la función de las organizaciones de los trabajadores rurales en el desarrollo económico y social, completado por una recomendación<sup>89</sup>.

Esta última proposición, también fue rechazada bajo el entendido de que la flexibilidad de una recomendación respondería mejor a las extremas condiciones de diversidad que se presentan en cada país en esta materia. Igualmente se adujo que un convenio sólo era exigible en la medida que fuese ratificado por un gobierno y que existían muchos convenios que tenían escasas ratificaciones, lo que no obstaba para que se adoptara un convenio sobre la materia en caso de hacerse necesario.

Es así que el Consejo de Administración de la OIT, recogió todas las propuestas y conclusiones generales, con las cuales presentó el texto de lo que debería ser la recomendación sobre trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social; y conforme al artículo 39 del reglamento de la Conferencia inscribió este tema como orden del día de la 60ª reunión de la conferencia a realizarse en 1975, quedando establecido como cuarto punto de ese orden.

La Conferencia, reunió de forma sintética la discusión presentada en el marco de la 59ª Conferencia Internacional del Trabajo, con respecto al tema de los trabajadores rurales, y preparó los Informes IV (1) y IV (2), preparatorios de la 60ª Conferencia Internacional del

---

<sup>89</sup> Actas 59ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1974. OIT. Ginebra. Pág. 483, párr. 26. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical\\_Conventions/Convention\\_no.\\_141/141\\_Spanish/09656\(1974-59\)Apendice\\_22.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._141/141_Spanish/09656(1974-59)Apendice_22.pdf)

Trabajo. En el primer informe, resumió la discusión que se presentó en el marco de la 59ª Conferencia, y recogió el texto de la recomendación de acuerdo con dicha discusión. Ese documento fue enviado a los Estados miembros, para que propusieran objeciones y enmiendas. Estas se recogieron en el Informe IV (2), país por país y tema por tema, con comentarios del propio Consejo, y finalmente concentró el texto a ser debatido por la próxima conferencia.

En el marco de la 60ª Conferencia Internacional del Trabajo, que contó con presencia de delegados de la FAO, los trabajadores acompañados por algunos Estados, insistieron en que la forma que el instrumento debería adoptar sería la de un convenio, debido a la importancia que revisten las organizaciones de los trabajadores rurales, así como los numerosos problemas que deben enfrentar tales trabajadores. Realizaron dicha solicitud, basados en el hecho de que la 59ª reunión de la Conferencia no excluía la posibilidad de adoptar un convenio, además habían sucedido cambios que obligaban a adoptar un mecanismo más coercitivo que el de la recomendación.

En su intervención, los trabajadores sostuvieron que el convenio representaría la forma más eficaz para proteger el derecho de asociación de los trabajadores rurales, al poseer más fuerza jurídica que una recomendación. Impulsaría a los gobiernos, además, a emprender una acción inmediata, ya que exige de los mismos, compromisos jurídicos concretos que van más allá del simple compromiso moral. Asimismo, aseguraría una cierta continuidad en la acción normativa de la OIT, en lo concerniente a los trabajadores rurales, dado que ya habían sido adoptados convenios sobre materias tales como el derecho de asociación en la agricultura, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, los métodos de fijación de salarios mínimos en dicho sector agrícola, en las plantaciones, etc.<sup>90</sup>

A su vez, los miembros de los empleadores apoyados por varios Estados, continuaron insistiendo en la adopción de un instrumento en la forma de recomendación, pues la

---

<sup>90</sup> Actas 60ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1975. OIT. Ginebra. Pág. 462, párr. 12. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de: [http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical\\_Conventions/Convention\\_no.\\_141/141\\_Spanish/09656\(1975-60\)Apendice\\_23.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._141/141_Spanish/09656(1975-60)Apendice_23.pdf)

flexibilidad de dicho instrumento posibilitaría adaptarla a las diferentes condiciones socioeconómicas de cada país. Adujeron, que el número de miembros a favor de la recomendación en la 59ª reunión fue tres veces superior a la que propugnaba por el convenio, llamaron la atención sobre la forma de conciliar intereses de los asalariados y los pequeños propietarios, por lo que era muy difícil recoger grupos tan dispares en una sola definición como debería hacerse en el convenio, señalaron que la preferencia constantemente manifestada por los miembros trabajadores en favor de los convenios, procedía de una interpretación falsa del valor jurídico de las recomendaciones.

Efectivamente, éstas sirven de guía a los gobiernos. Este carácter, les confiere más valor jurídico que el que tendría un convenio que no fuera ratificado o que sólo recibiera un número limitado de ratificaciones. Los miembros empleadores y varios miembros gubernamentales, estimaron por consiguiente, que en esta fase, una recomendación parecía ser más útil que un convenio para los trabajadores rurales<sup>91</sup>.

Bajo tal debate, varios miembros de los Estados instaron a los miembros trabajadores para que informaran las propuestas que éstos deseaban incorporar al convenio antes de tomar posición sobre este asunto. Éstos, señalaron que dicho proyecto de convenio se compondría del preámbulo y de los párrafos 1, 2, 3, 6, 7 y 14 del proyecto de recomendación propuesto por la Oficina en el Informe IV (2), mientras que el proyecto de recomendación se basaría en el conjunto total del texto propuesto por la Oficina, a reserva de las enmiendas que pudieran incluirse<sup>92</sup>. Culminando el debate, los miembros de los empleadores cambiaron su posición, en el sentido de adoptar un convenio complementado por un proyecto de recomendación, bajo el entendido de que si un gobierno no ratificaba el convenio, podría servirse de la recomendación para guiar su acción en este tema.

Finalmente, se llegó a un acuerdo para la creación de un grupo tripartito para discutir las propuestas de los miembros trabajadores y preparar el texto del proyecto de convenio. Este fue presentado, discutido y votado, obteniendo la mayoría para ser adoptado a

---

<sup>91</sup> Ibídem. Pág. 463, párr. 13.

<sup>92</sup> Ibídem. Pág. 463, párr. 15.



través de las figuras del convenio y la recomendación, que finalmente fueron denominados como Convenio 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, y la Recomendación No. 149 sobre organizaciones de trabajadores rurales. Es importante resaltar, que la votación final del Convenio 141 no tuvo ninguna oposición, y tan solo diez abstenciones<sup>93</sup>.

## **2.2 Análisis de la normativa del Convenio No. 141 de la OIT y la Recomendación No. 149**

El Convenio No.141 entró en vigor el 24 de noviembre de 1977, y a la fecha ha sido ratificado por 40 países entre ellos 10 de Latinoamérica (Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y La República Bolivariana de Venezuela)<sup>94</sup>. Se compone de 14 artículos, de los cuales los primeros 6 regulan específicamente el tema de las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, los restantes se refieren a las formalidades de aplicación, denuncia y derogatoria del mismo; por ello, analizaremos los primeros 6 artículos del Convenio. Por su parte, la Recomendación No. 149, aparte de su preámbulo tiene tres ítems, referentes a las disposiciones generales, el papel de las organizaciones de trabajadores rurales, y uno final denominado “medidas para favorecer el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales”, en el cual se encuentran disposiciones más detalladas con respecto a la promoción de las organizaciones de trabajadores rurales. De acuerdo con estas distribuciones, es necesario analizar la normatividad del convenio a la luz de los parámetros orientadores e interpretativos consagrados en la recomendación.

Siguiendo a Von Potobsky y Bartolomei de la Cruz (1990), el estudio normativo del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT, comprende tres elementos esenciales: **i)** las organizaciones que comprende el Convenio (Art. 1°), **ii)** el ámbito de aplicación personal (Art. 2°), y **iii)** el ámbito de aplicación material. Este último, está desarrollado por

---

<sup>93</sup> Acta de la Votación Final Nominal del Convenio 141. Conferencia Internacional del Trabajo. Sexagésima Reunión. Ginebra. 1975. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de: [http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical\\_Conventions/Convention\\_no.\\_141/141\\_Spanish/09656\(1975-60\)Votaciones.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._141/141_Spanish/09656(1975-60)Votaciones.pdf)

<sup>94</sup> Información relacionada en: [http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300\\_INSTRUMENT\\_ID:312286](http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312286), Recuperado el 27 de marzo de 2014.

los derechos sindicales básicos (Art. 3°), el papel de las organizaciones rurales (Art. 4°), y las medidas para favorecer el desarrollo de las organizaciones rurales (Arts. 5° y 6°), las cuales están complementadas por la Recomendación.

### **2.2.1 Las organizaciones que comprende el Convenio 141 de la OIT**

El artículo 1ro. del Convenio No. 141, señala: “*El presente Convenio se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan*”. Como se infiere de la redacción de la primera parte de este artículo, el mismo se aplica a todo tipo de organización de trabajadores rurales. Dicha regulación buscó ser de la mayor amplitud, lo cual encuentra justificación en la composición variada de las organizaciones rurales en los diferentes países. Éstas, en gran medida, se integran a partir de las diversas categorías de campesinos, que, para el caso colombiano, se expusieron en la primera parte de este trabajo.

De acuerdo al Informe IV (1), el instrumento debería aplicarse a todas las clases de organizaciones de trabajadores rurales, es decir, no solamente los sindicatos, sino también las organizaciones de agricultores o de campesinos, tales como las ligas campesinas, las asociaciones de agricultores o pequeños propietarios agricultores, de arrendatarios y de aparceros, etc., cualquiera que sea el estatuto de estas organizaciones o asociaciones. Tampoco se trataba de determinar si una organización debía constituirse exclusivamente con una sola categoría de trabajadores, o si debía tener una composición mixta<sup>95</sup>.

Sin embargo, desde los trabajos preparatorios del Convenio, se estableció que las Cooperativas no pueden estar incluidas dentro de las categorías de trabajadores rurales<sup>96</sup>, toda vez que el control de las cooperativas por las autoridades públicas, podría

---

<sup>95</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1975. Informe IV (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 7, párr. 12.

<sup>96</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 54.

plantear problemas frente a los principios de libertad sindical<sup>97</sup>. En razón a ello, la Recomendación No. 149, consideró en su párrafo 2° que tales cooperativas son consideradas como organizaciones de otra naturaleza, y que se deben regir por el instrumento dispuesto para las mismas en la Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo) (1966, núm. 127).

Dentro de la segunda parte del artículo 1°, se establece que también hacen parte de las organizaciones de trabajadores rurales, *“las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan”*. De acuerdo con la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el Convenio 141 no sólo puede aplicarse a organizaciones compuestas exclusivamente de trabajadores rurales, sino también a organizaciones que reúnan a trabajadores que no sean rurales, pero que representen sus intereses, por ejemplo, sindicatos generales comunes a diversas categorías de trabajadores<sup>98</sup>. Con ello, se permite la afiliación y acción conjunta de sindicatos industriales y rurales, así como la representatividad de los primeros en nombre de éstos.

### 2.2.2 Ámbito de aplicación personal

El ámbito de aplicación personal del Convenio 141, se establece en el artículo 2° de tal instrumento. Éste realiza la definición de los trabajadores a los cuales va destinado el mismo<sup>99</sup>. Como ya se ha dicho atrás, el primer numeral de éste artículo establece la definición de *“trabajador rural”* y qué categorías de trabajadores están comprendidos dentro del mismo. Así, se adopta una noción muy amplia de ocupación, pues se aplica no sólo a los trabajadores asalariados, sino también a los que trabajan por cuenta propia, citando de forma expresa a los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. Sin embargo, precisa en su numeral segundo, que se aplica a tales trabajadores por cuenta propia, siempre y cuando su principal fuente de ingresos sea la agricultura, y que

---

<sup>97</sup> Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. La Organización Internacional del Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires. Págs. 344 – 345.

<sup>98</sup> Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 1983. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del convenio y de la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra. Pág. 138. Párr. 333.

<sup>99</sup> El artículo 2° del Convenio 141 ya fue transcrito de forma literal en el Capítulo I, apartado *“Los trabajadores rurales desde la legislación colombiana y los organismos multilaterales (OIT y ONU)”*.

trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con la ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios.

La norma en comento, excluye de forma expresa de la noción de trabajadores rurales, a quienes empleen mano de obra permanente, a quienes empleen mano de obra numerosa con carácter estacional, y a quienes hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. Es decir, excluye del ámbito de aplicación personal a los agroindustriales, latifundistas y terratenientes. Es importante resaltar que en los documentos preparatorios del convenio, empleadores y trabajadores, señalaron que el instrumento se aplicaba a pequeños propietarios que utilizaran ayuda de terceros en sus labores sólo ocasionalmente, no así de los grandes propietarios que usaran mano de obra permanente<sup>100</sup>.

El objeto de delimitar de forma rigurosa el ámbito de aplicación personal del Convenio, obedece a que sirva como instrumento para mejorar sus condiciones de vida, o en términos de la OIT, para vincularlos al desarrollo económico y social. Así, la OIT señala que:

*En el sector agrícola, además de los asalariados, es decir, de quienes ofrecen sus servicios contra remuneración, sea totalmente en metálico, sea parcialmente en metálico y parcialmente en especie, existen muchos trabajadores semiindependientes e independientes, generalmente denominados agricultores (o campesinos): arrendatarios, aparceros, pequeños propietarios. Todos estos no asalariados, que a menudo ejecutan una agricultura de subsistencia, viven en condiciones de pobreza y miseria similares y a veces peores que las de los asalariados<sup>101</sup>.*

---

<sup>100</sup> Consejo de Administración de la OIT. 1974. Informe IV (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 6. Párr. 11.

<sup>101</sup> OIT. 1974. Doc. 22. Citado en Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 1983. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del convenio y de la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra. Pág. 139.

### 2.2.3 Ámbito de aplicación material

Como se indicó, el ámbito de aplicación material se consagra en los artículos 3° al 6° del Convenio 141, y los mismos son consolidados por la Recomendación 149, como se observará.

*Los derechos sindicales básicos* (Art. 3°) del convenio 141, enumeran lo que podría denominarse derechos sindicales o de asociación de los trabajadores rurales<sup>102</sup>. Estos reproducen los derechos sindicales y de asociación consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT, incluyendo precisiones para asegurar la independencia de las organizaciones rurales. Así, la norma señala:

#### **Artículo 3**

- 1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.*
- 2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.*
- 3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.*
- 4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.*
- 5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente artículo.*

---

<sup>102</sup> Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. La Organización Internacional del Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires. Pág. 345.

Como se puede ver, el numeral 1°, reproduce el contenido básico del artículo 2 del Convenio No. 87, el numeral 2° enuncia los principios que inspiran el Art. 3° del Convenio No. 87 y los Arts. 1° y 2° del Convenio 98, y los numerales 3°, 4° y 5°, reproducen los Arts. 7° y 8° del Convenio No. 87<sup>103</sup>. En consecuencia, el primer numeral desarrolla el derecho de asociación, el segundo contiene la norma sobre libertad sindical y la independencia de las organizaciones y los tres restantes se refieren al reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones de trabajadores rurales, la cual no debe menoscabar los principios consagrados en los primeros dos numerales, el respeto de la legalidad de las organizaciones de los trabajadores rurales y al principio de que la legislación no debe perjudicar ni ser aplicada en función de damnificar las garantías establecidas en los anteriores principios.

Frente a este punto, la Recomendación 149, reconociendo las circunstancias especiales en que se encuentra el sector rural de los países en vías de desarrollo (pobreza, dispersión, analfabetismo, diversas categorías de campesinos), señala en su párrafo octavo, que la legislación nacional debe promover una reglamentación que no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales, respetando siempre el principio de libertad sindical como adelante se verá.

Es necesario señalar la problemática que se suscitó con respecto al derecho a la huelga de los trabajadores rurales, frente a lo cual la Comisión de Expertos, conceptúo que al igual que los trabajadores industriales, los rurales también deben gozar de tal derecho, toda vez que es *“uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses económicos y sociales; toda disposición que prive a los trabajadores rurales de este derecho, será contraria a los Convenios sobre libertad sindical, incluido el Convenio núm. 141”*<sup>104</sup>. Sin embargo, el ejercicio de tal derecho, sólo podría hacerse efectivo para la categoría de trabajadores rurales asalariados, los cuales podrían negociar sus condiciones laborales frente a su

---

<sup>103</sup> Ibídem. Págs. 345 – 347.

<sup>104</sup> Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 1983. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del convenio y de la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra. Pág. 148.

empleador, circunstancia que se desdibuja en relación a las categorías de trabajadores rurales independientes.

No obstante, la Oficina Internacional del Trabajo ha establecido que los intereses de los trabajadores rurales independientes, en el marco de la vida económica, política y social del país que habitan, pueden ser promovidos y defendidos como grupo de presión, representando con la mayor fuerza posible sus intereses ante el Gobierno, los Partidos Políticos y la sociedad en general<sup>105</sup>, con miras a influir en decisiones relacionadas con las políticas nacionales o locales, con la legislación o con cuestiones administrativas que afectan a los intereses de sus afiliados<sup>106</sup>.

Frente al *papel de las organizaciones rurales* (Art. 4°), el Convenio 141 consagra que:

*Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural deberá ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven.*

Ello es complementado con un catálogo básico de actividades, que deben poder ejercer con total libertad los trabajadores rurales, en pro de sus intereses como la de sus afiliados, y a la vez ser vinculados como actores partícipes en entidades públicas encargadas de definir las políticas que afecten sus intereses, o las del sector rural.

Así, el párrafo 5° de la Recomendación 149, señala entre otras:

- a. que las organizaciones de trabajadores rurales, deberán estar facultadas para representar, promover y defender los intereses de los trabajadores rurales, en

---

<sup>105</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Segunda Edición. Pág. 71.

<sup>106</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1995. Servicios especiales de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Segunda Edición. Pág. 3.

particular procediendo a negociaciones y a consultas a todos los niveles, en nombre de esos trabajadores, tomados colectivamente;

- b. representar a los trabajadores rurales en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de desarrollo rural y en todas las etapas y niveles de la planificación nacional;
- c. hacer participar activamente y desde el principio a las diferentes categorías de trabajadores rurales, de acuerdo con el interés de cada una de ellas, en la aplicación en todas sus fases de: (i) programas de desarrollo agrícola, incluido el mejoramiento de las técnicas de producción, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización; (ii) programas de reforma agraria, colonización rural y recuperación de tierras baldías; (iii) programas relativos a obras públicas, industrias rurales y artesanía rural; (iv) programas de desarrollo rural, incluidos los ejecutados con la colaboración de las Naciones Unidas, de la OIT y de otros organismos especializados; (v) programas de información y educación;
- d. promover y asegurar el acceso de los trabajadores rurales a servicios como el crédito, los abastecimientos, la comercialización y el transporte, así como a servicios de índole tecnológica;
- e. intervenir activamente en el mejoramiento de la enseñanza y formación general y profesional en las zonas rurales, así como en la formación para el desarrollo de comunidades, las actividades cooperativas y otras actividades de las organizaciones de trabajadores rurales, y en la formación relativa a la gestión de estas organizaciones;
- f. contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, incluidas la seguridad y la higiene en el trabajo;
- g. promover el desarrollo de la seguridad social y de los servicios sociales básicos en esferas como la vivienda, la salud y el recreo.



Sin embargo, dicho catálogo de funciones es meramente enunciativo, toda vez que de acuerdo al artículo 3º, los trabajadores rurales pueden organizarse para defender sus intereses con la única observancia de respetar la legalidad, por lo cual su asociación profesional puede involucrar muchas más actividades de las que se enlistan.

En relación con las *medidas para favorecer el desarrollo de las organizaciones rurales* (Arts. 5º y 6º), el instrumento señala que todo Estado miembro que ratifique el Convenio, debe poner en práctica una política de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales, encaminada a eliminar los obstáculos que se oponen a su creación, desarrollo y al desempeño de actividades legítimas. Tal política, también debe anular las discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que puedan ser objeto tanto las organizaciones como sus afiliados, lo mismo que garantizar que la legislación nacional no obstaculice el establecimiento y desarrollo de organizaciones rurales. De igual forma, debe promover una política para fomentar el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.

Así, dichas disposiciones establecen acciones efectivas en pro de la promoción y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales, que incluyen la remoción de obstáculos, la asistencia a estas organizaciones, principalmente en su etapa inicial, su participación en el desarrollo económico y social, la información pública a la sociedad de estas organizaciones, y la enseñanza e información profesional.

En consecuencia, los obstáculos con que tropiezan las organizaciones de trabajadores rurales, son tanto prácticos como jurídicos. Frente a éstos, el Convenio No. 141 dispone que deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales. A su vez, la Recomendación núm. 149, preconiza una serie de medios que podrían facilitar la constitución y el desarrollo de dichas organizaciones. El estudio revela que los medios puestos en práctica varían mucho según los Estados, algunos de los cuales han

adoptado o se proponen adoptar al respecto, una política sistemática y fundamentada, mientras que otros recurren a acciones dictadas por la oportunidad del momento<sup>107</sup>.

## 2.3 Aplicación del Convenio 141 de la OIT en algunos países de América Latina

Establecidos los antecedentes y el análisis normativo del Convenio 141 de la OIT, complementado por la Recomendación 149, en este aparte se analizará la aplicación y utilización de tal instrumento en dos de los países latinoamericanos que han estado dentro de los primeros en ratificar tal instrumento: México y Guatemala. Para el primer país, se busca reflejar la aplicación que del mismo ha dado el Gobierno y el subsiguiente control por parte de los organismos especializados de la OIT. Frente a Guatemala, se expondrán las recomendaciones realizadas por la Oficina Internacional del Trabajo para la puesta en práctica del instrumento.

El Convenio 141 fue ratificado por México en junio de 1978, y su entrada en vigencia se hizo habiendo pasado un año. En las memorias que el gobierno mexicano ha enviado a la Oficina Internacional del Trabajo<sup>108</sup> para su control regular<sup>109</sup>, se precisó sobre dos temas primordiales: la legislación referente al ejercicio de la libertad sindical para los trabajadores rurales, y las diferentes categorías de tales trabajadores cubiertas por el convenio. Frente al primer punto, el gobierno citó las leyes civiles, laborales, de reforma agraria, al crédito rural, de cooperativas, y relativas a las asociaciones de productores agrícolas y ganaderos. En relación con las categorías de trabajadores cubiertas por el convenio, señaló a los asalariados, los ejidatarios<sup>110</sup>, comunidades indígenas,

---

<sup>107</sup> Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 1983. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del convenio y de la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra. Pág. 155.

<sup>108</sup> Las memorias son un mecanismo de control por parte de la OIT que da cuenta de la aplicación de los convenios ratificados por los distintos países, la obligación de enviar las mismas consta en el Art. 22 de la Constitución de la OIT.

<sup>109</sup> Las memorias que estudiamos en este punto son las enviadas por el Gobierno Mexicano a finales de los años 80' del pasado siglo.

<sup>110</sup> Los ejidios son comunidades rurales con derechos comunales sobre las tierras y el agua, cuyos miembros gozan del usufructo de la tierra, antes de las reformas de 1993 los ejidatarios no podían vender sus parcelas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas.

campesinos sin tierra, los parvifundistas<sup>111</sup>, colonos, productores agrícolas de un solo cultivo y ganaderos. Describió el marco legal de cada una de las organizaciones de trabajadores rurales, y las funciones de varios organismos gubernamentales relacionadas con los mismos. Concluyó haciendo énfasis en que, en México no existen restricciones de ningún tipo para que las organizaciones de trabajadores rurales ejerzan el derecho de sindicación, y que incluso las mismas están facultadas para construir organizaciones de segundo y tercer grado.

Sin embargo la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ha objetado a México, que no informe la manera cómo se estaban aplicando las disposiciones referentes a la promoción de las organizaciones de trabajadores rurales (Art. 5 del Convenio 141). Este es uno de los puntos centrales del Convenio, toda vez que no se informó de qué forma las organizaciones de trabajadores rurales estaban participando en el desarrollo económico y social de país. Así mismo, se objetó que no se hubiesen indicado las medidas adoptadas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales (Art. 6 del Convenio 141)<sup>112</sup>.

Frente a lo anterior, la Comisión solicitó al gobierno mexicano que suministrara información adicional sobre las medidas para favorecer el desarrollo de las organizaciones rurales (Arts. 4 a 6 del Convenio 141). Como respuesta a ello, ese gobierno envió una memoria más detallada, en la cual además de ratificar la normatividad laboral, civil, cooperativa, de crédito agrario y de reforma agraria aplicable a tales organizaciones, se indicaron las medidas específicas adoptadas en concordancia con los principios de Convenio, como el proceso de transformación estructural que propicia la reforma agraria, ante todo en la relaciones económicas y sociales de la agricultura, resaltando que éste es el factor central de cualquier medida política que

---

Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123423.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123423.pdf)

<sup>111</sup> Parvifundista es el nombre que recibe en México un pequeño propietario agrícola, lo que en Colombia se denominaría al propietario minifundista o microfundista.

<sup>112</sup> OIT. 1996. Convenio Núm. 141 y su aplicación en México y Filipinas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123423.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123423.pdf)

tienda a fomentar la creación de formas organizativas económicas y sociales y que también apunte a aumentar los niveles de producción y productividad.

Ese gobierno, también detalló las medidas encaminadas a favorecer el establecimiento de organizaciones campesinas de segundo y tercer grado, que pudiesen contribuir al desarrollo autónomo de sus recursos naturales, tecnológicos y financieros, así como organizaciones de trabajadores rurales a nivel local y nacional, para facilitar la comercialización y transformación de sus productos, el acceso a insumos, la contratación de servicios así como la integración de sus uniones y asociaciones<sup>113</sup>.

Por su parte, Guatemala ratificó el Convenio 141 en 1989. En las memorias que ha suministrado ese gobierno, sólo se limitó a señalar la normatividad aplicable a los trabajadores rurales, razón que obligó a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones a requerir información precisa acerca de la aplicación de dicho instrumento<sup>114</sup>. El gobierno guatemalteco, volvió a confirmar la misma información, con lo cual el organismo de control evidenció que el Convenio no estaba siendo implementado por el país a pesar de su ratificación.

En razón a la anterior situación, el Departamento de Desarrollo y Cooperación Técnica de la oficina Internacional del trabajo, analizó el contexto político del país, caracterizó las principales organizaciones de trabajadores rurales existentes en el mismo, y propuso varias recomendaciones para la intensificación del papel de éstas en Guatemala. Tales fueron dirigidas tanto al gobierno, como a los actores sociales del país relacionados con el Convenio, y a la propia OIT.

La Oficina señala, que el gobierno de Guatemala tiene el compromiso de fortalecer las organizaciones de trabajadores rurales, y brindarle un destacado papel en el proceso de desarrollo económico y social de ese país. Así mismo, debe procurar dar amplia publicidad al Convenio 141, para lo cual debe difundir el texto en las lenguas indígenas

---

<sup>113</sup> Ibidem.

<sup>114</sup> Tal información fue requerida al Gobierno Guatemalteco en el año de 1993. En: Oficina Internacional del Trabajo. S.f. Hacia la reconstrucción de la sociedad civil: las organizaciones de trabajadores rurales en Guatemala. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.oit.org/wcmstp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123431.pdf](http://www.oit.org/wcmstp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123431.pdf)

de su territorio, y divulgarlo en todo el país a través de sus organismos, entre los cuales está el Ministerio de Trabajo. A su vez, señala que el gobierno, podría tratar de establecer mecanismos para dar a las organizaciones de trabajadores rurales, un papel más destacado en la elaboración de políticas a nivel nacional.

La Oficina reconoce como actores sociales, tanto a los empleadores como a los sindicatos y organizaciones de trabajadores rurales. Frente a los primeros, los conmina a buscar mecanismos para satisfacer las reclamaciones legales de los trabajadores rurales asalariados, principalmente de las grandes plantaciones. Con los segundos, si bien se realza el hecho del gran número de sindicatos, ve con preocupación que la integración de los mismos, corresponda a diferentes categorías de trabajadores rurales, por lo que exhorta a los trabajadores rurales que conformen asociaciones de trabajadores rurales de categorías ocupacionales similares, con el fin de aumentar su nivel de negociación.

Finalmente frente a la OIT, la Oficina señala que el organismo en conjunto con el gobierno y los actores sociales, deben buscar mecanismos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores rurales. Entre estos, se encuentra hacer que el Convenio sea conocido, para lo cual recomienda celebrar seminarios que involucren a los trabajadores, gobierno y organismos multilaterales relacionados con temas agrarios, encuentros en los cuales la OIT debe suministrar el material básico para la elaboración por el gobierno, de un manual de procedimiento y de un posible reglamento del instrumento<sup>115</sup>.

Con lo anterior, se evidencia que si bien la preocupación de la OIT en la aplicación del Convenio 141 y la Recomendación 149 es el derecho de asociación, como se puso de presente en el caso Guatemalteco, el mayor énfasis que hace el organismo a través de sus entes especializados, se centra en las medidas para favorecer el desarrollo de las organizaciones rurales (Arts. 4 a 6 del Convenio), mediante las cuales se logra el principio fundamental del convenio: hacer partícipes a los trabajadores rurales del desarrollo económico y social de las naciones.

---

<sup>115</sup> *Ibidem*.

Mientras en México, así sea de manera paulatina, con el impulso de las recomendaciones de la OIT, se han venido desarrollando unos procedimientos específicos para la aplicación del convenio, en Guatemala ese trabajo está pendiente. Colombia, por su parte, no ha ratificado el Convenio 141, y el contexto de la participación de nuestro país en esta organización supranacional, en el marco del derecho de asociación de los trabajadores rurales, se verá a continuación.

### **3.El Derecho de Asociación y la Libertad Sindical en los Trabajadores Rurales Colombianos**

En este capítulo, se hará una aproximación al ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical de las diversas categorías de trabajadores rurales en Colombia. Ello, a fin de precisar si el Estado Colombiano garantiza o no, el goce de estos derechos fundamentales para este tipo de trabajadores. O si por el contrario, se hace necesaria la ratificación del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT, y así obtener mecanismos que permitan su control por parte de la OIT, como también agenciar herramientas de exigibilidad y justiciabilidad por parte de los trabajadores rurales.

#### **3.1 El Estado Colombiano frente al Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT**

Se abordará de manera sintética, la posición asumida por el Gobierno Colombiano en el marco del debate de la elaboración del Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT, así como las acciones de socialización y promoción de este instrumento por parte de los interlocutores sociales, empresarios y trabajadores rurales.

Colombia, como miembro de la OIT<sup>116</sup> participó en el procedimiento<sup>117</sup> de la doble discusión para la elaboración del Convenio 141 y la Recomendación 149. Por lo tanto, dio respuesta al cuestionario que acompañó el informe preliminar, que al respecto

---

<sup>116</sup> Colombia hace parte de la Organización Internacional del Trabajo desde el año 1919. Recuperado el 15 de abril de 2014, de <http://www.ilo.org/lima/paises/colombia/lang--es/index.htm>

<sup>117</sup> Como se señaló, este procedimiento se establece en los artículos 39 a 41 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo.

preparó la Oficina Internacional del Trabajo<sup>118</sup>. Se expondrán las principales observaciones formuladas por el gobierno de Colombia, así como su intervención en el debate en la Conferencia.

Dentro de sus respuestas, el gobierno de Colombia consideró necesario que la Conferencia adoptase un instrumento acerca de las organizaciones de trabajadores rurales, con el ánimo de que las mismas puedan promocionarse jugando un papel más dinámico en el desarrollo social y económico<sup>119</sup>.

En relación con el alcance del instrumento, estuvo de acuerdo que el mismo debería abarcar a la categoría de campesinos que ya hemos abordado en el primer capítulo de este trabajo. Pero consideró que el instrumento debería aplicarse específicamente a las organizaciones de los trabajadores rurales, más no a las cooperativas y otros tipos de organización mutua<sup>120</sup>.

En relación con las funciones de las organizaciones de trabajadores rurales, señaló que éstas deberían estar facultadas para: a) representar a los trabajadores rurales ante los patronos, las autoridades y ante terceros, en procura del mejoramiento de sus asociados, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos; b) apoyar y orientar a los trabajadores rurales, a fin de mejorar sus condiciones económicas y sociales; y c) participar en la aplicación de programas de mejoramiento técnico y de capacitación general, para tener un mejor conocimiento de los programas gubernamentales.

Frente al papel de las organizaciones de trabajadores rurales, y las medidas para favorecer el desarrollo de las mismas, aseveró que el gobierno es respetuoso de los principios de libertad sindical, los cuales están consagrados en la Constitución Política como en el Código Sustantivo del Trabajo, elementos con los cuales se facilita el establecimiento de estas organizaciones de forma voluntaria e independiente<sup>121</sup>. Puso de

---

<sup>118</sup> Nos referimos al Informe VI (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra.

<sup>119</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (2): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 8.

<sup>120</sup> *Ibidem* Pág. 13.

<sup>121</sup> *Ibid.* Págs. 17 y 31.



presente, que sometió al congreso los convenios relativos al derecho de asociación y libertad sindical<sup>122</sup>, dentro de los cuales se encuentran comprendidos los trabajadores rurales. Señaló que frente a las dificultades de los trabajadores rurales para su organización, el mismo se supera con la asesoría que les brindan los sindicatos urbanos. Y en relación con la formación profesional de estos trabajadores, se indicó que a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se les capacita en técnicas modernas de trabajo rural<sup>123</sup>. Habría que confirmar o no, esas informaciones a la luz de la realidades organizativas de los campesinos colombianos.

Se resalta, que dentro de las discusiones en la Conferencia frente a la forma que debía adoptar el instrumento, los miembros gubernamentales de Colombia, apoyaron que éste debería ser un Convenio complementado con una recomendación<sup>124</sup>.

Como parte de los delegados de los empleadores a la 60ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 1975, fue delegado el Sr. Carlos José González presidente de entonces de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien además de votar a favor del Convenio, reconoció en su discurso ante la Conferencia, la importancia del mismo para el desarrollo económico y social de los trabajadores rurales en Colombia<sup>125</sup>.

Por su parte, las organizaciones de trabajadores rurales a través de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), promovieron en el año de 1987 el seminario “*El Derecho de Asociación en el Campo*”, en el cual participaron delegados de la OIT, del Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y miembros directivos de los sindicatos agrarios. Tal seminario, además de discutir sobre la reforma agraria, el desarrollo rural y

---

<sup>122</sup> Convenios 87 y 98 de la OIT, que fueron ratificados mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, respectivamente.

<sup>123</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (2): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 63.

<sup>124</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1975. Actas Sexagésima Reunión. Ginebra. Pág. 464. Recuperado el 15 de abril de 2014, de: [http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical\\_Conventions/Convention\\_no.\\_141/141\\_Spanish/09656\(1975-60\)Apendice\\_23.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/conventions/Technical_Conventions/Convention_no._141/141_Spanish/09656(1975-60)Apendice_23.pdf)

<sup>125</sup> Discurso del delegado de los empleadores de Colombia, Doctor Carlos José González M., a la 60ª Conferencia Internacional del Trabajo, pronunciado el 13 de junio en la sede de la OIT, en Ginebra. 1975. Revista Nacional de Agricultura – SAC –. No. 816. Pág. 22 – 24. Bogotá, Junio 30 de 1975.

el alcance del Convenio 141, sirvió como base para incluir como reivindicación del movimiento campesino, la exigencia de que Colombia ratifique el Convenio 141 de 1975<sup>126</sup>.

### **3.2 El ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia**

En éste acápite, se realizará un diagnostico actual del ejercicio del derecho de asociación y la libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia, desde el plano formal y el plano material, tomando para ello como base el trabajo de campo que se realizó con la organización sindical de segundo grado, que agrupa al mayor número de sindicatos rurales, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)<sup>127</sup>. Se partirá de un breve diagnostico normativo y jurídico del derecho de asociación y libertad sindical en nuestro país. Esta indagación, se realizó en vista de que en nuestro país, no existen mayores estudios bibliográficos que den cuenta del tema.

El derecho de asociación y la libertad sindical, están garantizadas formalmente en Colombia. A través de las Leyes 26 y 27 de 1976, el Estado ratificó los Convenios 87 y 98 de la OIT, los cuales aseguran a los trabajadores y empleadores la constitución de las organizaciones que estimen convenientes, sin autorización previa de autoridad alguna y la protección contra los actos de discriminación, el derecho de asociarse de forma voluntaria así como la el derecho a la negociación, respectivamente. Sin embargo, dicha libertad de crear organizaciones, ha sido regulada en su funcionamiento por el Estado como adelante se verá.

Derechos que a su vez, adquirieron un nuevo empuje al ser consagrados como fundamentales por parte de la Constitución mediante su artículo 39, el cual junto con el artículo 53 de la Carta, abrió todo un debate en torno a la primacía de la normatividad internacional sobre la nacional, con el llamado bloque de Constitucionalidad, mediante el

---

<sup>126</sup> FENSA. 1987. El derecho de asociación en el campo. Ed. Colombia Nueva Ltda. Bogotá.

<sup>127</sup> FENSUAGRO es una organización sindical de segundo grado que recoge cerca de 100.000 afiliados campesinos agrupados en más de 70 sindicatos a lo largo del país, siendo la Federación más grande e importante en el sector de los trabajadores rurales. Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, enero – abril 2014.

cual las tesis de mayor avance sostenían que los convenios internacionales del trabajo ratificados por el país eran parte del bloque de constitucionalidad. Situación que fue zanjada de forma restrictiva por la Corte Constitucional, la cual señaló que sólo hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, los tratados internacionales que consagran derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción<sup>128</sup>.

En consecuencia, al estar consagrado el derecho de asociación y libertad sindical como fundamental en la Declaración de Filadelfia, mediante la cual se modificó la Constitución de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José, entre otros, los convenios 87 y 98 hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, al ser ratificado el Convenio 141 en desarrollo de los principios del derecho de asociación y libertad sindical, haría parte de facto, del bloque de constitucionalidad.

Así, analizando el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales desde el formal, podemos señalar que con la elevación del derecho de asociación a rango de derecho fundamental en la Constitución Política de 1991 (Art. 39), los trámites de inscripción y personería jurídica de los sindicatos, incluidos los rurales, se han visto reducidos, pues para su inscripción en el registro sindical del Ministerio del Trabajo (Art. 365 del CST), sólo se verifica que se cumpla con el número mínimo de afiliados siendo estos 25 (Art. 359 del CST).

De esta manera, el Ministerio del Trabajo ha reconocido personería jurídica a sindicatos de trabajadores rurales de diferente categoría, como sindicatos de pequeños productores dueños de tierra<sup>129</sup>, a sindicatos de arrendatarios, aparceros y trabajadores jornaleros sin

---

<sup>128</sup> Esto es las teorías de stricto y lato sensu, consagradas entre otras en las Sentencias C-617/08, C-228/09 y C-307/09.

<sup>129</sup> Tales como los casos de los pequeños productores de panela del Departamento de Caldas, asociados en la Asociación Nacional de Paneleros que se llama "AIPAN"; los pequeños productores de tabaco del Departamento de Santander, asociados en la Asociación de Pequeños Tabacaleros de Colombia "ASOTACOL", entre otras. Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, enero – abril 2014.

tierra<sup>130</sup>, a sindicatos de pequeños productores y comercializadores<sup>131</sup>, y a sindicatos departamentales que recogen a todas las categorías de trabajadores rurales<sup>132</sup>. Sin embargo, no existen sindicatos mixtos entre trabajadores rurales e industriales<sup>133</sup>. Con lo cual se podría argumentar que el gobierno colombiano da cumplimiento a los principios rectores del Convenio 141 de la OIT, en tanto permite que todas las categorías de organizaciones rurales que reúnan a cualquier clase de las categorías de trabajadores rurales (Art. 1º y 2º del C. 141), construyan las organizaciones que estimen convenientes y sin autorización previa, y se afilien a las mismas de forma libre y voluntaria (Art. 3º del C. 141), como precisamente lo ha hecho notar el gobierno desde el proceso de doble discusión que dio vida al Convenio 141.

Sin embargo, a pesar de que formalmente existe un respeto al derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia, consagrado en el Convenio 141 y la Recomendación 149, el cual como dijimos retoma el contenido esencial de los Convenios No. 87 y 98, y lo aplican a unas categorías particulares de trabajadores, tal instrumento va más allá del mero respeto al derecho de sindicación por parte de los Estados, pues obliga a éstos a abandonar una política pasiva en relación a estos trabajadores y los conmina a asumir políticas de promoción y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales (Arts. 4 a 6 del C. 141).

En términos materiales, no se garantiza el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales en Colombia, pues no existe una política de promoción con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes que los vincule y haga partícipes del desarrollo económico y social del país, ya que persisten obstáculos que se oponen al desarrollo y creación de tales organizaciones.

---

<sup>130</sup> Como el caso de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Recolectores de Café “APEMICAFÉ”. *Ibíd.*

<sup>131</sup> Como lo es el caso del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz “SINTRAPAZ”. *Ibíd.*

<sup>132</sup> Como el caso de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima “**ASTRATACOL**”. *Ibíd.*

<sup>133</sup> *Ibíd.*

El obstáculo principal que existe, es la estigmatización y la violencia contra los miembros de las organizaciones de trabajadores rurales por parte de instituciones del propio Estado, como de grupos alzados en armas como por ejemplo los paramilitares, muchos de ellos al servicio de grandes terratenientes. Además de atentar contra derechos de rango fundamental, como a la vida, la integridad física de la persona y la libertad de expresión, los actores violentos y estigmatizadores atentan contra principios básicos tanto del Convenio 141 como de los Convenios 87 y 98 de la OIT, pues como claramente lo ha expresado el Comité de Libertad Sindical los *“derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio”*<sup>134</sup>.

Dentro de tales violaciones se encuentra el hostigamiento, las amenazas y la prohibición de reuniones por parte de la fuerza pública a los miembros del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores del departamento de Sucre (SINDAGRICULTORES). Violencia que destruyó esa organización sindical, al resultar asesinado su presidente en el año 2007<sup>135</sup>. Así mismo, se reporta la estigmatización y judicialización de miembros de los sindicatos de trabajadores rurales acusados de pertenecer a grupos insurgentes, como sucedió en enero del presente año en el Bordo Cauca, con la detención y subsiguiente judicialización de 17 campesinos pertenecientes a un sindicato agrario, acusados presuntamente de rebelión<sup>136</sup>.

A su vez, para el pleno ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical, el gobierno debe garantizar una política de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales, que de acuerdo al párrafo 18 de la Recomendación, conlleva a que se preste ayuda financiera o material, por ejemplo, para poder llevar a cabo programas de enseñanza y formación, respetando siempre la autonomía y los intereses de los trabajadores, apoyo

---

<sup>134</sup> Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. 1996. Derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a la integridad física o moral de la persona. Párr. 44. Recuperado el 15 de abril de 2014, de: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/23s2006.pdf>

<sup>135</sup> Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de FENSUAGRO, enero – abril 2014.

<sup>136</sup> *Ibidem*.

que se convierte en determinante pues las condiciones materiales de los trabajadores rurales Colombianos lo exigen. Esta circunstancia, que consideramos es una de las que más problemática genera, toda vez que las condiciones de exclusión en que se haya la mayoría de los miembros de tales organizaciones, incitan a que los Gobiernos traten de controlar dichas organizaciones de trabajadores, como ya efectivamente ha sucedido y como adelante se verá.

Lo anterior reviste la mayor importancia, pues tal como lo ha señalado la Oficina Internacional del Trabajo, las organizaciones de trabajadores rurales no deberán estar sometidas a ninguna clase de injerencia, coerción o represión<sup>137</sup>, de lo contrario se pondría en riesgo la libertad sindical que aún poseen la mayoría de estos sindicatos, cual es la cero intervención del Estado en sus organizaciones, lo que se traduce en una autonomía de tales trabajadores, siendo ello de suyo, y en sus difíciles condiciones ya una clara conquista (Silva, 2005).

La imposibilidad material, de que los afiliados a las organizaciones de trabajadores rurales puedan cancelar cuotas sindicales por falta de recursos, obstaculiza el pleno desarrollo de éstas. Aunado a ello, la dispersión de los miembros de los sindicatos rurales en grandes territorios, entorpece el ejercicio de actividades propias del funcionamiento de esas asociaciones, lo mismo que la falta de asistencia y asesoría a estas organizaciones (Párr. 10 Recomendación 149)<sup>138</sup>.

Dichos obstáculos de falta de financiación, formación y dispersión, también afectan a las Federaciones, las cuales encuentran en ellos una barrera para la comunicación con sus bases, realizar diagnósticos de sus necesidades y ofrecer cursos de formación a los dirigentes sindicales como a los campesinos de base, e incluso llegan a ser motivo de discriminación para las organizaciones sindicales de primer y segundo grado, toda vez

---

<sup>137</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1983. Libertad sindical y negociación colectiva. Ginebra. Pág. 155. Párr. 364.

<sup>138</sup> *Ibíd.*

que el Banco Agrario, entidad financiera agraria nacional, tiene dentro de sus políticas la prohibición expresa, aprobar créditos a las organizaciones de trabajadores rurales<sup>139</sup>.

Por su parte, uno de los principios del derecho de asociación y libertad sindical de los trabajadores rurales, se traduce en la participación de sus organizaciones, en el desarrollo económico y social, lo cual se materializa con la adopción de medidas adecuadas por parte de los entes pertinente del Estado para lograr que haya consultas y diálogos efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales, sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales (Párr. 10 Recomendación 149). Es decir, un reconocimiento como sujeto político que debe ser vinculado a la definición de políticas, tanto del sector rural como del territorio en el cual desarrollan sus planes de vida. En concreto, se trataría de la participación en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria<sup>140</sup>.

Es clave resaltar que si bien los campesinos tienen asiento en la toma de decisiones de las políticas del sector, por ejemplo en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), su participación es simbólica, pues sólo tiene asiento un representante de los trabajadores rurales de todo el país, lo que no le permite definir las políticas de desarrollo rural y reforma agraria a la luz de las necesidades e intereses de las diferentes asociaciones y sindicatos de base, sino simplemente aprobar las que define el gobierno de turno<sup>141</sup>. Siendo aquel derecho, uno de los ejes del Convenio 141, tal como lo define en su preámbulo.

A su vez, en Colombia no existe una política de promoción de los sindicatos tanto ante la población, las autoridades, ni entre los propios trabajadores rurales. En cambio, se promueven organizaciones de trabajadores rurales dependientes de los entes gubernamentales.

---

<sup>139</sup> Tal como sucedió directamente con FENSUAGRO, pues su presidente solicitó un crédito en una oficina del Banco Agrario y el argumento para negar el mismo fue este. *Ibíd.*

<sup>140</sup> Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. *La Organización Internacional del Trabajo*. Ed. Astrea. Buenos Aires. Pág. 352.

<sup>141</sup> Comunicación personal con Eberto Díaz, presidente de **FENSUAGRO**, enero – abril 2014.

Por el contrario, los trabajadores rurales se ven enfrentados a la estigmatización y señalamientos, lo cual en un panorama de conflicto social armado, hace que se los asocie con los actores armados. Por ello, se hace necesario, tal como lo señala la recomendación, que se promuevan las organizaciones de trabajadores rurales, mediante campañas de educación dirigidas a la población en general, empleadores, miembros del estado, e incluso dirigidas a los propios trabajadores, con el fin de que se entienda la existencia y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales, que no pueden ser otras que las de la búsqueda de la defensa de los intereses de estos trabajadores; intereses que, a su vez, se resumen en eliminar las condiciones históricas de exclusión en que tales actores se encuentran. Es decir, esta promoción de los trabajadores rurales es el reconocimiento de los mismos como sujetos de derechos.

Frente a ello, la Recomendación 149 (Párr. 14 y 15), propone unos mecanismos para el fomento de estas organizaciones, entre las cuales se encuentra la información de sus derechos por medios masivos de comunicación y de sus condiciones de vida, organizaciones de seminarios con la participación de todos los sectores rurales y las autoridades públicas, así como programas en las escuelas en las que se reflejen los problemas de la producción agrícola y la vida de los trabajadores rurales.

Tales elementos del derecho de asociación de los trabajadores rurales son violados por diversas entidades Estatales, tales como la fuerza pública, autoridades locales y regionales e incluso judiciales, quienes se encargan de estigmatizar y hostigar a los trabajadores rurales organizados en sindicatos, como hemos señalado, generando el temor, la apatía y la estigmatización de éstos trabajadores como alzados en armas. Estas circunstancias, son en gran medida responsables de la baja tasa de sindicalización de los trabajadores rurales, según la cual menos del 1% de la población campesina se encuentra afiliada a los sindicatos de trabajadores rurales<sup>142</sup>.

Además de la falta de promoción de los trabajadores rurales, se han creado organizaciones rurales de segundo grado, dependientes directamente de entidades gubernamentales, con lo que se viola el más elemental principio de la libertad sindical,

---

<sup>142</sup> Ibidem.



cual es la autonomía. Esta circunstancia, fue vivida en el pasado gobierno el cual creó la Federación Agraria Nuevo Liderazgo Campesino, con el fin de mantener un estricto control de las organizaciones de trabajadores rurales<sup>143</sup>, circunstancia proscrita por las más básicas normas del derecho de asociación y los derechos humanos, y frente a la cual la Oficina Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado clausurando tales prácticas<sup>144</sup>.

De igual forma, las actividades de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales, conllevan la implementación de programas de enseñanza y formación profesional (Recomendación 149 Párr. 16 y 17), como modo de contribuir al desarrollo de las mismas, entre las cuales se encuentran medidas para la capacitación de los dirigentes, los educadores de los trabajadores rurales, la formación técnica de los propios trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Empero, dados los problemas de financiación, dispersión y estigmatización de los trabajadores rurales en Colombia, dicho propósito no se logra.

Como ya quedo dicho, el ejercicio pleno del derecho de asociación y la libertad sindical de los trabajadores rurales, va más allá del simple respeto por parte del Estado de los principios consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT. Pues para el desarrollo material del derecho de asociación y de la libertad sindical de esta específica clase de trabajadores, existe la obligación de brindar apoyo activo a las organizaciones de trabajadores rurales y asegurarles la participación efectiva en el desarrollo económico y social y los beneficios que de él se derivan<sup>145</sup>. Frente a esto, la Recomendación 149 propone algunos mecanismos específicos para fomentar el crecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales, en la cual se incluyen medidas legislativas y administrativas, de información pública, educación y formación, así como asistencia financiera y material a estas organizaciones indistintamente de su grado.

---

<sup>143</sup> *Ibíd.*

<sup>144</sup> Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Pág. 26.

<sup>145</sup> OIT. 1996. Convenio Núm. 141 y su aplicación en México y Filipinas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/publication/wcms\\_123423.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_123423.pdf)

Lo anterior encuentra su razón en las condiciones de pobreza histórica, falta de tierra, estigmatización, violencia, falta de reconocimiento como sujeto de derechos, desplazamiento e incluso en muchos casos analfabetismo, que aquejan a los trabajadores rurales de Colombia.

## 4. Conclusiones y recomendaciones

Los campesinos, como grupo social diferenciado, se caracteriza por un modo de producción propio, en el que se conjuga la tierra como medio de producción (ya sea propia, ajena, o mediante procesos de tenencia informales), y el uso del trabajo propio y familiar, así como otras formas de pequeña escala de organización del trabajo, en las cuales se puede ver vinculado como jornalero. En este análisis, tal diferenciación se la ha coincidido con la categoría “trabajadores rurales” que emplea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –con el fin de cobijar las diversas categorías de campesinos que existen en todos los países miembros–, bajo su marco misional de mejorar las condiciones de vida de éstos.

Según la OIT, los trabajadores rurales cobijan múltiples categorías de personas dedicadas a tareas agrícolas o similares, en forma asalariada o por cuenta propia, *“(incluidos los aparceros, los arrendatarios y los pequeños propietarios cultivadores), siempre que, en el caso de quienes trabajan por cuenta propia, ellos y su familia realicen la mayor parte del trabajo agrícola, aunque contraten a trabajadores eventuales para ciertas operaciones o el trabajador por cuenta propia trabaje como asalariado durante parte del año”*<sup>146</sup>. De esta manera, por un lado se excluyen a terratenientes (su labor es administrativa) como a obreros de la agroindustria (que vincula salarialmente grandes cantidades de personas en forma permanente); y por otra parte, se puede afirmar que la categoría campesinos equivale a los trabajadores rurales que trata la OIT.

---

<sup>146</sup> Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, informe VI (1). 1973. Organización de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra. Pág. 7.

Teniendo en cuenta esa definición genérica de campesinos o trabajadores rurales, en ella caben varias categorías según las modalidades de acceso y tenencia de la tierra, como de las formas de trabajo que en ella se desarrollan. En Colombia hay toda una diversidad de categorías de campesinos socialmente reconocidos, categorías que desbordan los parámetros establecidos por los análisis de teóricos en la materia (cf. Sevilla Guzmán, s. f. b.). A modo de ejemplo – las distintas dinámicas regionales pueden generar muchas más categorías de campesinos o complejizarlas–, se han expuesto algunas de esas categorías (cuadro No. 4), propuestas de acuerdo con las variables de acceso a la tierra (con / sin tierra) y la autonomía de su labor (dependiente / independiente).

Esa diversidad de categorías de campesinos o trabajadores rurales, se da en contextos específicos, de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y políticas que históricamente han acompañado al campesinado colombiano. Condiciones signadas por una permanente, histórica y sistemática exclusión, dentro de la cual uno de sus rasgos más representativos está en la estructura agraria de Colombia. Ésta, a su vez, se caracteriza por un régimen de tenencia de la tierra bimodal, en la cual se acentúa el crecimiento de la pequeña y gran propiedad (Machado, 2009), circunstancia que además determina el uso del suelo. En esta distribución agraria, el trabajador rural no posee su activo básico, la tierra, generándose mayores niveles de dependencia y pobreza en relación con la población urbana.

Consideramos que las dinámicas de exclusión, además de la negación del acceso a la tierra, cubren todos los ámbitos de derechos sociales, económicos y políticos: analfabetismo, endeudamiento financiero, falta de acceso a servicios efectivos de salud, de vías, transporte, etc. Carencias que remiten también a la escasa presencia estatal, sin políticas agrarias serias que, al menos propendan por el aprovechamiento y comercialización efectiva de la producción. De esta manera, el Estado, pero también la sociedad en conjunto, han desconocido a los campesinos o trabajadores rurales como sujetos de derechos (Forero, 2010), circunstancia que los inhibe de la participación en las políticas del sector rural, la cual se encuentra reservada para los agroindustriales y los sectores de la economía especulativa del agro, los primeros por ser considerados como forjadores de una verdadera economía nacional y los segundos por la sobre representación que tienen en los cargos político administrativos decisivos.

Estas exclusiones, lo mismo que obnubilación gubernamental con la agroindustria y la minería, resultan paradójicas atendiendo a que los campesinos colombianos, con menos del 24% de la tierra productiva del país, aportan más del 60% de la producción agrícola nacional<sup>147</sup>. Ese potencial de la economía agraria, está invisibilizado y desprovechado, bajo el desconocimiento o la estigmatización de los sistemas de producción y de vida campesinos.

Teniendo en cuenta esta falta de participación de los trabajadores rurales en el desarrollo económico y social en países con iguales o similares circunstancias a las nuestras, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, aprobó el Convenio 141 y la Recomendación 149. En virtud de ésta normativa, se asegura tal participación a los trabajadores rurales o campesinos, a través de la generación de mecanismos para el pleno ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical.

En Colombia, existen diversidad de asociaciones y sindicatos agrarios, que han sido organizados por los campesinos para hacer frente a sus condiciones de exclusión, pobreza y violencia. De esta manera encontramos algunos sindicatos y asociaciones de trabajadores rurales de diferente categoría, con personería jurídica reconocida por el Ministerio del Interior, como sindicatos de pequeños productores dueños de tierra, a sindicatos de arrendatarios, aparceros y trabajadores jornaleros sin tierra, a sindicatos de pequeños productores y comercializadores, y sindicatos departamentales que recogen a todas las categorías de trabajadores rurales (Díaz, 2014).

El estado ha argumentado que tanto en la Constitución Política como en el Código Sustantivo del Trabajo, se encuentran las normas suficientes para garantizar tanto la libertad sindical como el derecho de asociación libre y voluntaria de los trabajadores rurales colombianos. A pesar de ello, en Colombia no hay políticas que promuevan las agrupaciones o sindicalización de los trabajadores agrarios. Según el presidente de FENSUAGRO, la federación nacional que agrupa a los sindicatos rurales en nuestro país, sólo el 1% de la población campesina se encuentra agrupado en estas asociaciones y sindicatos (Díaz, 2014).

---

<sup>147</sup> Machado, (2009). Op. Cit. Pág. 126

De otro lado, la estigmatización social, el olvido estatal, la incursión en el conflicto armado, las acciones violentas de poderosos gamonales e intereses políticos y territoriales, han provocado que algunos de esos sindicatos y asociaciones agrarios hayan sido suprimidos por el asesinato de sus líderes y los señalamientos, incluso de la fuerza pública legal, de asumir a los asociados y sindicalistas campesinos como insurgentes o alzados en armas; o que otros funcionen muy deficientemente (Díaz, 2014).

Con el Convenio 141 y la Recomendación 149 de la OIT, se configura una nueva dimensión del derecho de asociación y libertad sindical, la cual ya no sólo consiste en la garantía estatal para su ejercicio formal, tal como se presenta en los trabajadores industriales. Sino que, se exige de estos Estados, el aseguramiento efectivo de la misma, materializado en apoyo económico, promoción y formación de estos trabajadores en caso de ser necesario, además de la obligación de los Estados en vincularlos decisoriamente en las políticas del sector, como por ejemplo las de reforma agraria.

Resulta no menos que paradójico, que un instrumento creado para el desarrollo económico y social de una capa de la población en países con características como el nuestro, un país en vías de desarrollo, haya sido soslayado sucesivamente por nuestros gobiernos. Estos, bajo el argumento tácito de que dichos derechos ya se encuentran garantizados para este tipo de trabajadores con la normativa para sindicatos genéricos, no han ratificado ni el Convenio 141 ni la Recomendación 149 de la OIT. Argumento que sólo es cierto en términos formales, puesto que las difíciles y especiales condiciones a que se ven enfrentados nuestros campesinos, organizados o no en un manojo de sindicatos agrarios sobrevivientes, inhiben en términos reales el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical.

De esta forma, la ratificación oficial del Convenio 141 y de la Recomendación 149 de la OIT, resulta más que necesaria, es urgente, y no resultaría para nada redundante. Al contrario, ella brindaría herramientas jurídicas reales no sólo para el ejercicio de la libre agrupación de este importante y particular segmento social, sino que prescribe la configuración de toda una estrategia, que articularía mecanismos y programas en pro de la dignificación, respeto y fomento de unas mejores condiciones de trabajo y de vida

---

– partiendo de sus particularidades, fortalezas y posibilidades– , para los campesinos o trabajadores rurales de nuestro país.





## **A. Anexo: Convenio sobre las organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975 (núm. 141)**

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión;

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia de los trabajadores rurales en el mundo, es urgente asociarlos a las tareas del desarrollo económico y social si se quiere mejorar sus condiciones de trabajo y de vida en forma duradera y eficaz;

Tomando nota de que en muchos países del mundo, y muy especialmente en los países en vías de desarrollo, la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la mano de obra está en gran parte subempleada y de que estas circunstancias exigen que los trabajadores rurales sean alentados a desarrollar organizaciones libres y viables, capaces de proteger y de defender los intereses de sus afiliados y de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social;

Considerando que la existencia de tales organizaciones puede y debe contribuir a atenuar la persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo;

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales y que, por consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar y participar activamente en esta reforma;

Recordando los términos de los convenios y de las recomendaciones internacionales del trabajo existentes (en particular el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura),

1921; el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e independientes, así como las disposiciones de muchos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide en especial que las organizaciones de trabajadores participen en su aplicación;

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se interesan todos por la reforma agraria y el desarrollo rural;

Tomando nota de que las siguientes normas han sido preparadas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de que, a fin de evitar duplicación, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para promover y asegurar la aplicación de dichas normas;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la presente reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975:

### **Artículo 1**

El presente Convenio se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan.

## **Artículo 2**

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión *trabajadores rurales* abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios.
2. El presente Convenio se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:
  - d) no empleen una mano de obra permanente; o
  - e) no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o
  - f) no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

## **Artículo 3**

1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.
3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.
5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente artículo.

#### **Artículo 4**

Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural deberá ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven.

#### **Artículo 5**

1. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social, todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto.
2. Todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.

#### **Artículo 6**

Deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales, así como para incrementar la renta nacional y lograr una mejor distribución de la misma.

#### **Artículo 7**

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

#### **Artículo 8**

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

#### **Artículo 9**

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

#### **Artículo 10**

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

#### **Artículo 11**

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas

las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

### **Artículo 12**

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

### **Artículo 13**

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
  - a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
  - b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

### **Artículo 14**

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

## **B.Anexo: Recomendación sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales 1975 (núm. 141)**

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión;

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia de los trabajadores rurales en el mundo, es urgente asociarlos a las tareas del desarrollo económico y social si se quieren mejorar sus condiciones de trabajo y de vida en forma duradera y eficaz;

Tomando nota de que en muchos países del mundo, y muy especialmente en los países en vías de desarrollo, la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la mano de obra está en gran parte subempleada y de que estas circunstancias exigen que los trabajadores rurales sean alentados a desarrollar organizaciones libres y viables, capaces de proteger y defender los intereses de sus afiliados y de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social;

Considerando que la existencia de tales organizaciones puede y debe contribuir a atenuar la persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo;

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, y que, por consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar y participar activamente en esta reforma;

Recordando los términos de los convenios y de las recomendaciones internacionales del trabajo existentes (en particular el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e independientes, así como las disposiciones de muchos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide en especial que las organizaciones de trabajadores participen en su aplicación;

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se interesan todos por la reforma agraria y el desarrollo rural;

Tomando nota de que las siguientes normas han sido preparadas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de que, a fin de evitar duplicación, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para promover y asegurar la aplicación de dichas normas;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la presente reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975:



## **I. Disposiciones Generales**

### **1.**

1) La presente Recomendación se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan.

2) Además, la Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo), 1966, continuará siendo aplicable a las organizaciones de trabajadores rurales a las que está destinada.

### **2.**

1) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión *trabajadores rurales* abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del subpárrafo 2) del presente párrafo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros, y pequeños propietarios.

2) La presente Recomendación se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios, y que:

- a) no empleen una mano de obra permanente; o
- b) no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o
- c) no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

3. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, deberían tener derecho a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

## II. Papel de las Organizaciones de Trabajadores Rurales

4. Uno de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural debería ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven.

5. Tales organizaciones deberían, según los casos, estar facultadas para:

- a) representar, promover y defender los intereses de los trabajadores rurales, en particular procediendo a negociaciones y a consultas a todos los niveles, en nombre de esos trabajadores, tomados colectivamente;
- b) representar a los trabajadores rurales en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de desarrollo rural y en todas las etapas y niveles de la planificación nacional;
- c) hacer participar activamente y desde el principio a las diferentes categorías de trabajadores rurales, de acuerdo con el interés de cada una de ellas, en la aplicación en todas sus fases de:
  - i) programas de desarrollo agrícola, incluido el mejoramiento de las técnicas de producción, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización;
  - ii) programas de reforma agraria, colonización rural y recuperación de tierras baldías;
  - iii) programas relativos a obras públicas, industrias rurales y artesanía rural;
  - iv) programas de desarrollo rural, incluidos los ejecutados con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y de otros organismos especializados;
  - v) programas de información y educación y otras actividades previstas en el párrafo 15 de la presente Recomendación;
- d) promover y asegurar el acceso de los trabajadores rurales a servicios como el crédito, los abastecimientos, la comercialización y el transporte, así como a servicios de índole tecnológica;

- e) intervenir activamente en el mejoramiento de la enseñanza y formación general y profesional en las zonas rurales, así como en la formación para el desarrollo de comunidades, las actividades cooperativas y otras actividades de las organizaciones de trabajadores rurales, y en la formación relativa a la gestión de estas organizaciones;
- f) contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, incluidas la seguridad y la higiene en el trabajo;
- g) promover el desarrollo de la seguridad social y de los servicios sociales básicos en esferas como la vivienda, la salud y el recreo.

### **III. Medidas para Favorecer el Desarrollo de las Organizaciones de Trabajadores Rurales**

6. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social, los Estados Miembros deberían adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a:

- a) eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto;
- b) extender a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros facilidades de educación y formación profesional similares a las que disfrutaban otras organizaciones de trabajadores y sus miembros;
- c) permitirles perseguir una política que garantice a los trabajadores rurales la protección y prestaciones sociales y económicas correspondientes a las que se otorgan a los trabajadores de la industria o, si se da el caso, a los trabajadores dedicados a otras ocupaciones de carácter no industrial.

7.

- 1) Los principios de la libertad sindical deberían respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberían tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.

- 2) La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no debería estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones del párrafo 3 y del subpárrafo 1) de este párrafo.
- 3) Al ejercer los derechos que se les reconocen en el párrafo 3 y en el presente párrafo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberían, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.
- 4) La legislación nacional no debería menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el párrafo 3 y en el presente párrafo.

#### **A. Medidas de carácter legislativo y administrativo**

##### **8.**

- 1) Los Estados Miembros deberían garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.
- 2) En particular:
  - a) los principios de la libertad sindical y de negociación colectiva, tal como se consignan en el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, deberían observarse plenamente mediante la aplicación al sector rural de la legislación general en la materia o mediante la adopción de disposiciones especiales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de todas las categorías de trabajadores rurales;
  - b) la legislación pertinente debería estar totalmente adaptada a las condiciones especiales de las zonas rurales, en particular para:
    - i) evitar que las exigencias relativas al número mínimo de miembros, a los niveles mínimos de formación y a los fondos mínimos necesarios impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, con una población dispersa y pobre que posee un nivel de instrucción muy bajo;
    - ii) asegurar que los problemas que puedan plantearse en torno a la manera como las organizaciones de trabajadores rurales entran en contacto

con sus miembros se resuelvan de modo que se respeten los derechos de todos los interesados, y con arreglo a los términos del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971;

iii) proteger eficazmente a los trabajadores rurales interesados contra el despido o la evicción motivados por su condición de dirigentes o miembros de organizaciones de trabajadores rurales, o por sus actividades como tales.

**9.** Debería haber procedimientos adecuados, ya sea en el marco de los servicios de la inspección del trabajo, ya sea como servicios especializados u otros mecanismos, que garanticen el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros.

**10.**

**1)** Cuando, debido a las condiciones existentes, los trabajadores rurales tengan dificultad para tomar la iniciativa de crear y hacer funcionar sus propias organizaciones, debería estimularse a las organizaciones existentes para que proporcionen a esos trabajadores rurales, a petición suya, una asistencia y un asesoramiento apropiados, que correspondan a los intereses de los trabajadores rurales.

**2)** En caso necesario, y cuando así se solicite, esta asistencia podría complementarse con servicios consultivos por personal calificado para prestar asesoramiento jurídico y técnico y para impartir instrucción.

**11.** Deberían adoptarse medidas adecuadas para lograr que haya consultas y diálogo efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales.

**12.**

**1)** Por lo que se refiere a la formulación y, eventualmente, a la aplicación de los planes y programas económicos y sociales y de cualquier otra medida de carácter general relativa al desarrollo económico, social y cultural de las zonas

rurales, las organizaciones de trabajadores rurales deberían estar asociadas a los procedimientos e instituciones de planificación, como son los servicios y comités oficiales, los organismos de desarrollo y los consejos económicos y sociales.

- 2) En particular, deberían adoptarse medidas apropiadas para hacer posible la participación efectiva de tales organizaciones en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria.

13. Los Estados Miembros deberían estimular la creación de procedimientos e instituciones que favorezcan los contactos entre las organizaciones de trabajadores rurales, los empleadores y sus organizaciones y las autoridades competentes.

## **B. Información pública**

14. Deberían adoptarse medidas, especialmente por parte de las autoridades competentes, para promover:

- a) una mejor comprensión por parte de los directamente interesados, como son las autoridades centrales, locales y otras, los empleadores rurales y los propietarios de tierras, de la contribución que podrían prestar las organizaciones de trabajadores rurales al incremento y mejor distribución de la renta nacional, al aumento de las oportunidades de empleo productivo y remunerador dentro del sector rural, a la elevación del nivel general de instrucción y de formación de las diferentes categorías de trabajadores rurales y al mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales;
- b) una mejor comprensión por parte del público en general, y en particular en los sectores no rurales de la economía, de la importancia que tiene el mantener un equilibrio adecuado entre el desarrollo de las zonas rurales y el de las zonas urbanas y de la conveniencia de favorecer el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales como medio para lograr este equilibrio.

15. Estas medidas podrían consistir, entre otras cosas, en:

- a) campañas de información y de educación de masas en especial para proporcionar a los trabajadores rurales información completa y práctica sobre sus derechos a fin de que puedan ejercitarlos cuando lo necesiten;
- b) programas de radio, televisión y cine, así como la publicación regular de artículos en la prensa local y nacional en que se describan las condiciones de vida y de trabajo en las regiones rurales y se expliquen los objetivos de las organizaciones de trabajadores rurales y los resultados de su actuación;
- c) la organización, en el plano local, de seminarios y de reuniones con la participación de representantes de las diferentes categorías de trabajadores rurales, de los empleadores y de los propietarios de tierras, de otros sectores de la población y de las autoridades locales;
- d) la organización de visitas a las regiones rurales de periodistas, representantes de los empleadores y de los trabajadores de la industria y el comercio, de escolares y estudiantes universitarios acompañados por sus profesores y de otros representantes de diferentes sectores de la población;
- e) la preparación de programas apropiados de enseñanza para los diversos tipos y niveles de escuelas que reflejen adecuadamente los problemas de la producción agrícola y la vida de los trabajadores rurales.

### **C. Enseñanza y formación profesional**

**16.** A fin de lograr que las organizaciones de trabajadores rurales se desarrollen adecuadamente y asuman rápidamente todas sus funciones en el desarrollo económico y social, deberían tomarse medidas, entre otras, por las autoridades competentes, con objeto de:

- a) dar a los dirigentes y a los miembros de estas organizaciones nociones acerca de:
  - i) la legislación nacional y las normas internacionales relativas a materias que presentan un interés directo para la actividad de las organizaciones, tales como el derecho de asociación;
  - ii) los principios fundamentales que rigen la creación y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales;

- iii) los problemas del desarrollo rural como parte del desarrollo económico y social del país, incluidos la producción agrícola o artesanal, el almacenamiento, la transformación, el transporte, la comercialización de los productos y los intercambios comerciales;
  - iv) los principios y las técnicas de planificación nacional a los diferentes niveles;
  - v) los manuales y programas de formación publicados o establecidos por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo u otros organismos especializados que tienen por objeto la educación y la formación de los trabajadores rurales;
- b)** mejorar y fomentar la educación de los trabajadores rurales en todos los planos, general, técnico, económico y social, con objeto de hacerlos más capaces para desarrollar sus organizaciones y conocer sus derechos y, al mismo tiempo, para participar activamente en el desarrollo del medio rural. Debería prestarse atención particular a la formación de los trabajadores total o parcialmente analfabetos mediante programas de alfabetización ligados al desarrollo práctico de sus actividades;
- c)** promover programas que tengan en cuenta el papel que las mujeres pueden y deben desempeñar en las comunidades rurales, como parte integrante de los programas generales de enseñanza y de formación a los que las mujeres deberían tener las mismas posibilidades de acceso que los hombres;
- d)** proporcionar una formación especial a los encargados de la educación de los trabajadores rurales que les dé la posibilidad, por ejemplo, de contribuir al desarrollo de servicios cooperativos y de otros tipos de servicios adecuados que permitan a las organizaciones atender directamente las necesidades de sus miembros y reforzar su independencia merced a la autonomía económica;
- e)** apoyar programas que incluyan todos los aspectos de la promoción de la juventud rural.

**17.**

- 1)** Para proporcionar efectivamente la educación y formación a que se hace referencia en el párrafo 16 supra, deberían establecerse y desarrollarse



programas de educación obrera y de educación de adultos adaptados especialmente a las condiciones nacionales y locales, así como a las necesidades sociales, económicas y culturales de las diversas categorías de trabajadores rurales, incluidas las necesidades particulares de las mujeres y de los adolescentes.

- 2) En vista de sus conocimientos y experiencia en estas materias, los movimientos sindicales y las organizaciones existentes que representan a los trabajadores rurales podrían ser asociados estrechamente a la formulación y puesta en práctica de tales programas.

#### **D. Asistencia financiera y material**

##### **18.**

- 1) Cuando las organizaciones de trabajadores rurales, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo, consideren que necesitan ayuda financiera o material, por ejemplo, para poder llevar a cabo programas de enseñanza y formación, y cuando soliciten y obtengan esa ayuda, deberían tener la posibilidad de recibirla de manera que se respeten totalmente su independencia e intereses y los de sus miembros. Esa asistencia debería ser complementaria de las iniciativas y los esfuerzos de los trabajadores rurales para financiar sus propias organizaciones.
- 2) La disposición anterior se aplica a toda ayuda financiera y material, inclusive cuando sea política del propio Estado proporcionar tal ayuda.



# Bibliografía

Actas 60ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1975. OIT. Ginebra.

Acta de la Votación Final Nominal del Convenio 141. Conferencia Internacional del Trabajo. Sexagésima Reunión. Ginebra. 1975.

Archetti, Eduardo P. 1978. Una visión general de los estudios sobre el campesinado. En: Revista Estudios Rurales Latinoamericanos. Vol. 1. No. 1. Bogotá, enero-abril.

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 1983. Estudio general acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como del convenio y de la recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra.

Crouch, Luís A., y De Janvry, Alain. (1979). El debate sobre el campesinado: teoría y significación política. En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.2 No. 3. Bogotá, Septiembre – Diciembre.

Díaz, Eberto. 2014. Presidente Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO. Comunicación personal (grabaciones en audio). Febrero – abril.

Forero Alvares, Jaime. 2010. El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Bogotá.

Gómez, Sergio E. 2008. Nueva ruralidad: fundamentos teóricos y necesidad de avances empíricos. En: Pérez, Edelmira.; Farah, María A.; Grammont, Hubert. (Compiladores). *La*

*nueva ruralidad en América Latina. Avances teóricos y evidencias empíricas.* Bogotá: Universidad Javeriana, Clacso.

Heath, John Richard. (1987). Reproducción y diferenciación de la economía campesina: esbozo de un nuevo enfoque y aplicación a tres casos latinoamericanos. En *Revista Estudios Rurales Latinoamericanos*. Vol.10 No. 1. Bogotá, Enero – Abril.

Llambí, Luís. 1990. Procesos de transformación del campesinado latinoamericano. En: Bernal, Fernando. (Compilador). *El campesinado contemporáneo. Cambios recientes en los países andinos*. Bogotá: Cerec, Tercer Mundo Editores.

Lozano, Alfreso. 1998. Jornaleros e inmigrantes. FLACSO, Programa República Dominicana, Santo Domingo.

Machado C., Absalón. 2009. La reforma rural, una deuda social y política. CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Moncayo S., Héctor León. 2008. La transformación indeseada. En *La cuestión agraria hoy Colombia: Tierra sin campesinos*. ILSA. Bogotá.

Oficina Internacional del Trabajo. 1992. Estructura y funciones de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Segunda Edición.

Oficina Internacional del Trabajo. 1983. Libertad sindical y negociación colectiva. Ginebra.

Oficina Internacional del Trabajo. 1995. Servicios especiales de las organizaciones de trabajadores rurales. Ginebra, Suiza. Segunda Edición.

Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra.

Oficina Internacional del Trabajo. 1974. Informe VI (2): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra.

Oficina Internacional del Trabajo. 1975. Informe IV (1): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra.

Oficina Internacional del Trabajo. 1975. Informe IV (2): Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social. Ginebra.

OIT. 1996. Convenio Núm. 141 y su aplicación en México y Filipinas. En: Función de las Organizaciones de Trabajadores en el Desarrollo Económico y Social: estudio de caso del Convenio Núm. 141 de la OIT en México y Filipinas.

Pérez, Edelmira. 2001. Hacia una nueva visión de lo rural. En: Giarraca, Norma. (Compiladora). *Una nueva ruralidad en América Latina*. Buenos Aires: Clacso, Colección grupos de trabajo.

Pinchao A., y Francy García. (2014). Comunicación personal.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD –. 2011. Colombia rural razones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano. Bogotá.

Rivera A, Rigoberto. (1989). Campesinado: el enfoque de las estrategias de hogar. En Revista Estudios Rurales Latinoamericanos. Vol.12 No. 3. Bogotá, Septiembre – Diciembre.

Salgado, Carlos; Prada, Esmeralda. 2000. *Campesinado y protesta social en Colombia 1980 – 1995*. Bogotá: CINEP.

Sevilla Guzmán, Eduardo. 2004. Sobre la evolución del concepto de campesinado en el pensamiento socialista: una aportación para vía campesina.

Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f. a. Redescubriendo a Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de <http://moviments.net/espaimarx/docs/33ebd5b07dc7e407752fe773eed20635.pdf>

Sevilla Guzmán, Eduardo. s.f. b. Para una definición sociológica de campesino. Recuperado el 27 de marzo de 2014, de

<http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/18%20Para%20una%20definici%C3%B3n%20sociol%C3%B3gica%20de%20campesinado.pdf>

Shanin, Teodor. 1988. El mensaje de Chayanov: aclaraciones, faltas de comprensión y “teoría del desarrollo contemporánea”. En *Agricultura y sociedad*. No. 48.

Silva, Marcel. 2005. Proyección de un siglo de derecho laboral colectivo en Colombia. 3ra Edición. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Valticos, Nicolás. 1977. Derecho Internacional del Trabajo. Ed. Tecnos. Madrid.

Von Potobsky, Geraldo W., y Bartolomei de la Cruz, Héctor G. 1990. La Organización Internacional del Trabajo. Ed. Astrea. Buenos Aires.